

**ANEXO 15:**

**INFORME SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
(SECRETARÍA DE LA CORTE, ABRIL DE 2001)**

# EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

ABRIL 28, 2000

*Informe elaborado por la Oficina del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre los Derechos Humanos, creado por los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos el 22 de noviembre de 1999 en San José, Costa Rica.*

## Introducción

La promoción y la protección de los derechos humanos siempre han estado entre los mandatos principales de la OEA. Para hacer realidad esa visión de acción colectiva, los Estados Miembros de la Organización crearon el sistema interamericano de derechos humanos. Sus dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con base en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte), con sede en San José, se han granjeado un respeto, quizás sin paralelo, en la historia de nuestras instituciones hemisféricas.

Sin embargo, existe la idea clara de que el financiamiento del sistema de derechos humanos es cada vez más inadecuado. Lo que se necesita, ante todo, es un mayor volumen de recursos destinado al sistema. Además, una fuente de financiamiento más racional y previsible corregiría algunas de las dificultades actuales del sistema.

Este trabajo procura abordar una cuestión específica planteada por el grupo *ad hoc* sobre derechos humanos, que fue creado por un grupo de los ministros de relaciones exteriores del hemisferio reunidos en San José, Costa Rica. Esa preocupación específica se refiere a las implicaciones que tiene para el presupuesto regular de la OEA, atender las necesidades de los órganos de derechos humanos.

Como respuesta a esta cuestión, proponemos, primero, enmarcar el tema dentro del panorama más amplio de la actual situación financiera de la OEA, concentrándonos luego en las finanzas de los propios órganos de derechos humanos. Posteriormente, esbozaremos dos posibles escenarios financieros utilizando datos proporcionados por la CIDH y la Corte. En aras de la sencillez, los escenarios parten esencialmente del supuesto de que la operación básica de los propios mecanismos no cambiará fundamentalmente en el transcurso de ese tiempo. Pero, también es útil ilustrar el costo separado de nuevas ideas, lo que es presentado en una sección aparte. En la sección final, procuramos aunar y contextualizar la discusión financiera, y analizar las implicaciones que ésta tiene para la OEA, para su presupuesto regular y para los Estados Miembros.

## **I. Las finanzas de la OEA: una mala situación que se empeora**

El panorama financiero de la OEA ha sido difícil durante años y es probable que se empeore. Se espera que los ingresos de la Organización se sigan deteriorando tanto en términos nominales como reales. Dicha tendencia tiene varias explicaciones. En primer lugar, los ingresos recibidos a través de las cuotas, la fuente más importante de financiamiento de la Organización (95% en 1999), han venido disminuyendo sostenidamente desde 1996, tanto en términos reales como nominales.

En términos nominales, el ingreso por concepto de cuotas representó sólo US\$67,5 millones en 1999, en comparación con los US\$67,6 millones recaudados por este concepto en 1998. Además, corresponde señalar que, de todos los recursos recibidos durante el año pasado, US\$36 millones (53,3%) corresponden a pagos de cuotas del año 1999. La diferencia, US\$31,6 millones (46,7%), provienen del pago de cuotas atrasadas de años anteriores.

El ingreso de la Organización por concepto de cuotas en términos reales ha venido disminuyendo desde 1995. Ello se debe a que el plan de cuotas no ha sido enmendado desde 1994, cuando fue fijado en US\$73,7 millones (con vigencia desde 1995), lo que significa que los aumentos de la inflación han venido desde entonces reduciendo la capacidad financiera de la Organización.

Dado que la Organización ha venido funcionando cada año con menos recursos en términos reales, puede decirse que la Secretaría ha generado un ahorro para los países miembros del orden de los US\$25 millones en términos reales entre 1995 y 2000. Este ahorro se ha producido en efecto de dos maneras: por un lado, incrementando la productividad y la eficiencia de la Secretaría y, por el otro, reduciendo los montos destinados a ciertos mandatos para los que no se pudo obtener fuentes de financiamiento. Algunas de las recortes que hemos logrado son el resultado de una reducción de actividades en áreas que fueron indicadas como prioridades por los países miembros pero que, debido a las restricciones financieras, no pudieron ser ejecutadas.

El Secretario General ha reiterado su convicción de que la realización de recortes de esta manera no constituye una función adecuada de la Secretaría, dado que su obligación es la ejecución y el cumplimiento de los mandatos de los Estados Miembros en la forma más efectiva posible. Cuando el ahorro significa no ejecutar lo que se ha definido como actividades prioritarias, en realidad, no es un ahorro, sino una pérdida en términos de los servicios que la Organización debiera estar prestando. Sin embargo, debido a los problemas presupuestarios (el congelamiento de las cuotas) y a problemas de liquidez (el no pago de las cuotas) la Secretaría se ha visto obligada a adaptar sus servicios a sus limitaciones financieras.

### **A. Análisis del presupuesto de este año: El Fondo Regular**

El presupuesto de una organización como la nuestra refleja sus prioridades políticas; en nuestro caso, estas se expresan a través de los mandatos aprobados por la Asamblea General.

Por ejemplo, este año el presupuesto presentó un monto de US\$80 millones del Fondo Regular, cifra que resulta de valorar y cuantificar las prioridades asignadas en el presupuesto para el año 2000, con previsiones adicionales para nuevos mandatos y obligaciones.

Por instrucción de la Asamblea General, el proyecto de presupuesto no supero los US\$80 millones<sup>1</sup>, suponiendo que la suma recibida por el pago de cuotas alcanza dicho nivel. Ello representa la suma recibida a través de las cuotas de los Estados Miembros, el ingreso estimado por intereses, las contribuciones de apoyo técnico y administrativo del Fondo Específico, y otros ingresos.

En orden a reflejar el mandato de la Asamblea General con respecto a las fuentes de financiamiento, este año la Secretaría ha optado por dividir la presentación del presupuesto en dos amplias categorías:

La primera corresponde a las actividades que actualmente desarrolla la Secretaría. Este presupuesto es de US\$76 millones que, como se indica más adelante, sería financiado con ingresos que la Secretaría espera recibir durante el 2001. Esto supone que los países miembros pagarán todas las cuotas asignadas para el año 2001, por un monto total de US\$73,7 millones.

La segunda categoría, que representa US\$4 millones, corresponde a los mandatos y actividades para los cuales aún no se ha obtenido fuente de financiamiento. Estos US\$4 millones para actividades sólo serán ejecutados si la Organización obtiene ingresos adicionales mediante un aumento en los niveles actuales de las cuotas, un mayor ingreso por concepto de intereses o un incremento en las contribuciones de apoyo técnico y administrativo de los fondos específicos.

El presupuesto para el año 2001 representa un esfuerzo por maximizar los recursos disponibles, teniendo en cuenta la situación económica que enfrentan nuestros países miembros, así como las prioridades políticas que ellos mismos han establecido. Sin embargo, es preciso señalar que durante el proceso de preparación del presupuesto, se identificaron mandatos y necesidades adicionales, que no pudieron ser incluidos dentro de los US\$80 millones. Estas necesidades representan US\$3,7 millones adicionales. La diferencia entre el proyecto de presupuesto de la Corte para el 2001 de aproximadamente US\$1,5 millones y el presupuesto asignado de US\$1,1 millones queda comprendida en esta categoría.

### **Distribución de fondos por sectores y áreas prioritarias**

Los recursos del Fondo Regular se distribuyen de acuerdo con las áreas prioritarias. Esta información se indica a continuación y, además, en el apéndice 1 en forma de gráfico:

---

1. AG/RES. 1697 (XXIX-O/99).

- Las áreas de la administración general recibirán US\$17,4 millones (21,8%) y el apoyo a los órganos políticos será de US\$15,6 millones (19,5%).
- La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), recibirá US\$11,8 millones (14,7%). De este monto, US\$8,7 millones (10,8%) se destinarán a becas. Los restantes US\$3,1 millones (3,9%) se destinarán a los gastos de cooperación y administración de la AICD.
- Conferencias y reuniones de los órganos políticos: US\$7,9 millones (9,8%).
- Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros US\$6,5 millones (8,1%)
- **Derechos Humanos: US\$4,6 millones (5,7%), distribuidos aproximadamente CIDH \$3.5m (4,4%), Corte \$1.1m (1.4%)**
- Democracia: US\$3,4 millones (4,3%)
- Se han incluido US\$300.000 (0,4%) para descargar los mandatos de la Asamblea General en Canadá.
- La distribución entre otras áreas prioritarias es la siguiente: Comercio, US\$2,3 millones (2,9%); Asuntos Jurídicos, US\$3,4 millones (4,2%); Oficina Ejecutiva de la CICAD, US\$2,4 millones (3,0%); Desarrollo Sostenible, US\$1,7 millones (2,2%); Turismo y Organización Caribeña de Turismo (CTO), US\$0,7 millones (0,9%).

#### **B. Fondos Específicos (anteriormente denominados fondos voluntarios)**

En 1999, se recibieron cerca de US\$37 millones en contribuciones de los países a los fondos específicos. Estos recursos han permitido que la Secretaría financie programas en áreas prioritarias mediante el uso de fondos externos.

En particular, en el caso de cuatro áreas, los recursos de los fondos específicos fueron esenciales para la ejecución de las actividades de la Organización en 1999:

- La Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ejecutó programas por unos US\$6,9 millones, de los cuales sólo el 17,5% fue financiado por recursos del Fondo Regular.
- La CICAD ejecutó programas por US\$3,2 millones, de los cuales sólo el 34,5% fue financiado con recursos del Fondo Regular.

- La UPD ejecutó programas por US\$15,9 millones, de los cuales sólo el 16,3% fue financiado con recursos del Fondo Regular.
- **DERECHOS HUMANOS ejecutó programas por US\$4.5 millones, de los cuales el 88% fue financiado con recursos del Fondo Regular.**

La Secretaría seguirá procurando atraer recursos externos para el financiamiento de los mandatos y de las actividades de la Organización durante el año 2001.

## II. Las finanzas de los órganos de derechos humanos

En comparación con otras áreas de la OEA en el presupuesto, el sistema de derechos humanos ha sido bien contemplado. Ello es, por supuesto, reflejo de la prioridad que los Estados Miembros otorgan a esta parte de la labor de la Organización.<sup>2</sup> Sin embargo, en aspectos significativos, los órganos de derechos humanos son también víctimas de este panorama financiero difícil.

### Los Fondos Específicos y los derechos humanos

Si bien nuestro análisis se concentra fundamentalmente en el financiamiento del sistema por el Fondo Regular, es importante comprender el impacto de los Fondos Específicos en esta discusión.

Las dificultades financieras generales han llevado a que ambos órganos del sistema dependen sustancialmente de los fondos específicos. Los fondos específicos están abiertos a las contribuciones de virtualmente cualquier fuente o país, incluso de Estados Miembros que realizan una contribución además de su cuota al fondo regular. Es importante subrayar que estos fondos específicos han sido y siguen siendo utilizados para operaciones en mandatos básicos. Por ejemplo, la CIDH ha utilizado los fondos específicos para las visitas *in loco*, para los costos vinculados a la defensa de casos ante la Corte, las relatoras, el desarrollo de la administración de la información, la publicación de documentos (incluido el informe anual) y el mejoramiento de los servicios de biblioteca. Haciendo un uso más tradicional de los fondos especí-

---

2 Sin embargo, se pueden hacer otras comparaciones ilustrativas. Mientras que la OEA gasta el 5,2% de su presupuesto en derechos humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene una prioridad presupuestaria mucho mayor en la labor del Consejo de Europa. Del total del presupuesto del Consejo de Europa para 1999, de más de mil millones de franco franceses, el 19% —aproximadamente US\$147 millones— se destinaron a la Corte y a otros programas de derechos humanos. Aunque esta cifra no se puede extraer con claridad del presupuesto del Consejo de Europa, un funcionario de la Corte informó que el presupuesto operativo de ese órgano es de aproximadamente 164 millones de francos franceses, es decir, unos US\$24 millones. Además, el Consejo de Europa patrocina la labor de derechos humanos de otras organizaciones y ello no está incluido en estas cifras (HRLJ, Vol. 20, No. 1-3, pág. 114.)

ficos, la CIDH también los ha utilizado para complementar la labor sobre derechos de los indígenas, para publicar un manual de derechos humanos y para donar material de derechos humanos a las universidades de América Latina.

La Corte, por su parte, ha utilizado los fondos específicos para financiar el departamento de publicaciones (equipo y recursos humanos) y para documentos, artículos y libros, así como para la página de la Corte en la red. Además, la Corte utiliza los fondos específicos para financiar los costos de la contratación local de personal administrativo y asistentes letrados. Este año, la Unión Europea concluyó una donación por una sola vez a la Corte, destinada a la actualización de sus publicaciones, incluyendo su informe anual.

Fondos específicos particulares están atados a los intereses individuales expresados por los Estados Miembros. También están estrechamente relacionados con la capacidad y la voluntad de los Estados Miembros -tal vez como respuesta a sus propias dificultades fiscales- para donar recursos. No se trata de fondos con los que se pueda contar todos los años para financiar las operaciones. Dicho en otras palabras, dadas las dificultades generales de la época, el recurso a los fondos específicos a lo largo de los años ha introducido distorsiones en el esquema de financiamiento en que la CIDH y la Corte deben operar. Esta cuestión que afecta a los órganos de derechos humanos, no es el único dentro del Sistema de la OEA, pero puede afirmarse, sin duda, que, en razón de la naturaleza del sistema de derechos humanos y de su relación singular con los Estados Miembros, el problema en esta esfera es particularmente perjudicial. Por ejemplo, lejos de planear la labor de derechos humanos de acuerdo con las necesidades más acuciantes, con frecuencia el presupuesto disponible o previsible determina el plan de trabajo de derechos humanos para el año, incluyendo el número de visitas *in loco*, el número de sesiones, el número de publicaciones, etc.

Un aspecto crítico de la problemática del tema financiero de los órganos de derechos humanos, entonces, es la racionalización de la cuestión de las fuentes de financiamiento.

## **A. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Finanzas y Proyecciones**

### **1. Consideraciones generales**

El retorno a la democracia en la mayoría de los países de la región no ha supuesto una disminución de presentación de causas y procesos en derechos humanos. Todo lo contrario, al levantarse los regímenes represivos, una mayor transparencia social evidencia una gran cantidad de espacios de violación de los derechos fundamentales, y la incapacidad relativa de varios de los sistemas judiciales nacionales para encontrar una solución adecuada ante el elevado número de violaciones.

Sin perjuicio de los éxitos alcanzados por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos durante los últimos veinte años, las proyecciones presupuestarias que se han preparado para el funcionamiento de la Corte y el desarrollo de las actividades que ellos

encierran, tienen como intención permitir en una forma sistemática la revisión de mecanismos, normativa y eficacia que son urgentes, dado el creciente número de demandas incoadas por concepto de violaciones de derechos humanos, así como la evidente necesidad por perfeccionar el acceso directo de las víctimas. Desde la perspectiva de los propios Estados partes, de múltiples expertos y así como de una gran cantidad de ciudadanos de los países del Continente, es urgente someter al sistema a un proceso de mejoramiento cuidadoso para que sea más accesible, efectivo, eficiente, dinámico y capaz de cubrir las crecientes demandas que la sociedad democrática y la protección de los derechos humanos demandan.

Existe coincidencia casi unánime de que, a pesar de sus enormes avances y presencia hemisférica, se trata de un sistema de protección en cierto respecto entrapado dentro de un esquema de financiamiento sin el dinamismo necesario para cumplir con las exigencias de justicia pronta y cumplida, principio básico de derechos humanos, consagrado por la propia Convención Americana.

## **2. Situación financiera actual de la Corte: 2000 Actual y 2001 Propuesto**

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no ser un órgano permanente, desarrolla su trabajo en sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebran en su sede en San José de Costa Rica, para lo cual los jueces deben viajar desde sus respectivos países en esas fechas. Durante los últimos cinco años, la Corte enfrentó un aumento sustancial en el número de casos, opiniones consultivas y medidas provisionales que son sometidos a su consideración.

Sin embargo, el presupuesto de la Corte se ha mantenido estático durante los últimos tres años en un monto de US\$1,114,900.00, el cual no ha permitido cubrir adecuadamente año con año el constante incremento de los costos de operación por el volumen de casos que maneja, así como el costo adicional que representa la inflación acumulada durante los últimos tres años.

Este presupuesto solamente permite el funcionamiento de la Corte con el mínimo de los recursos, con el consecuente deterioro de los servicios que se deben prestar para el adecuado trabajo del Tribunal. Normalmente se hacen recortes o eliminan actividades importantes para no cerrar o terminar el año fiscal con déficit presupuestario.

Por esta razón, la Corte ha preparado un proyecto de presupuesto para el año 2001 a ser sometido a la Asamblea General de la OEA por US\$1,521,682.27 que representa un monto ajustado que permitiría a la Corte desarrollar sus funciones en forma más holgada, aunque en forma no permanente, durante el próximo año. Este proyecto de presupuesto pretende mejorar la disponibilidad de recursos humanos para la operación del Tribunal, así como atender en forma más adecuada el desarrollo de las cuatro sesiones proyectadas para este año, las visitas a la Sede de la OEA y la operación general de la Secretaría.



## **Información General Aplicable Al Funcionamiento Contable De La Corte**

Seguidamente se hace una descripción general de las metas que componen la operación anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reflejada en su presupuesto y en los cuadros siguientes. Adicionalmente, dentro del primer cuadro existen explicaciones sobre otros temas.

Los proyectos de presupuesto preparado por la Corte están divididos en diez metas. La meta primera corresponde a los recursos humanos de la Secretaría de la Corte compuesto por abogados, asistentes y personal administrativo. Las metas tercera a sexta a la celebración de períodos ordinarios de sesiones; la meta séptima a la asistencia del Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Corte a la Asamblea General de la Organización; las metas octava y novena a reuniones en la sede de la Organización con diversas Comisiones especializadas y la meta décima al funcionamiento regular de la Secretaría del Tribunal.

### **Metas 3 a 6: Sesiones Ordinarias de la Corte.**

Recientemente la Organización de Estados Americanos aprobó los fondos necesarios para realizar cuatro sesiones anuales, las cuales tienen una duración promedio de dos semanas. Se espera que estas cuatro sesiones anuales permitan al Tribunal cumplir con eficiencia las funciones que le han sido encomendadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Durante el último lustro, la Corte enfrentó un aumento sustancial en el número de casos, opiniones consultivas y medidas provisionales que son sometidos a su consideración, por lo que se han ajustado los niveles de presupuesto para que los recursos humanos y materiales correspondan a la necesidad básica de cumplir con los programas de sesiones diseñados a partir de 1998 y que se mantienen aún para el desarrollo de las actividades del año 2000 así como dentro del Proyecto de Presupuesto del año 2001. Esta situación varía con respecto al proyecto de presupuesto elaborado con el fin de planificar el funcionamiento permanente del Tribunal, en el sentido de que allí las sesiones serán realizadas conforme surja la necesidad (ver Apéndice 2 sobre Corte Permanente). Por esta razón, el proyecto sometido a la consideración de la Honorable Comisión de Asuntos Presupuestarios de la OEA propone también la celebración de cuatro sesiones ordinarias para el año de 2000 y 2001, con el propósito de mantener un nivel óptimo de trabajo, acorde con la necesidad de tramitar eficientemente un grupo cada vez mayor de asuntos.

Una función elemental de esas sesiones es resolver los casos presentados a la Corte en cualesquiera de las siguientes cuatro etapas procesales: excepciones preliminares, fondo, reparaciones y supervisión de cumplimiento de la sentencia. Cada una de estas etapas involucra una distinta problemática y, en consecuencia, genera gastos de diversa naturaleza. Por ejemplo, si bien en la etapa de excepciones preliminares las audiencias públicas tienen un carácter excepcional, en las etapas de fondo y reparaciones dichas audiencias son esenciales para proveer a la Corte los elementos de juicio necesarios para emitir una sentencia.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

En las audiencias mencionadas se escuchan los testimonios ofrecidos tanto por el Estado demandado como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la práctica, escuchar estos testimonios consume períodos sustanciales de cada sesión. En promedio, la Corte escucha de cuatro a seis testimonios durante un día de audiencias públicas. Tomando en consideración este dato, tomaría al Tribunal mucho más de 30 días de audiencia pública escuchar todos los testimonios y experticias que están pendientes hasta el momento durante un año de trabajo. La gravedad de esta situación se torna obvia cuando se considera que para el resto del año 2000 e igual situación sucede para el año 2001, el Tribunal sesionará un total de 44 días cada año (según se ha presupuestado), de los cuales pocos son los que han podido ser reservados para la celebración de audiencias públicas.

Una vez que el procedimiento oral ha concluido, la Corte delibera sobre el fondo del caso. Las deliberaciones generalmente son realizadas durante la sesión inmediata siguiente a aquella en la cual se recibieron los testimonios. En la práctica de la Corte, las deliberaciones han estado limitadas a un período de sesiones y la sentencia respectiva ha sido emitida y notificada al término de dicha sesión. Usualmente, la emisión de una sentencia toma a la Corte de cuatro a cinco días, e implica un arduo trabajo que involucra el análisis exhaustivo del acervo probatorio; estudio y elaboración de investigaciones doctrinarias y jurisprudenciales especializadas; deliberación, redacción y discusión de un proyecto de sentencia y aprobación del mismo.

Sin embargo, el número de casos actualmente ante la Corte ha exigido que se destinen menos días a cada deliberación. En efecto, del total de días en que la Corte sesionará durante el año 2000 o 2001, más de la mitad se espera que sean dedicados a la emisión de sentencias, opiniones consultivas; es decir, en promedio, para cada sentencia y opinión consultiva se utilizará menos de tres días. En consecuencia, las sentencias sobre el fondo en los últimos casos que han ingresado a la Corte serán emitidas en el año de 2000 o 2001, y en aquellos casos que ingresen a la Corte del segundo semestre del año 2000 en adelante, la deliberación y emisión de sentencia sobre el fondo deberá ser programada posiblemente para el año 2001 o 2002.

Actualmente, en los casos ante la Corte, un promedio de 28 meses transcurre entre la presentación de la demanda y la emisión de la sentencia sobre el fondo del caso. A menos que se implementen soluciones eficaces y duraderas, este promedio aumentará gradualmente, pues si bien en los últimos cinco años el número de casos ante el Tribunal se ha triplicado, el número efectivo de días de sesiones únicamente ha aumentado en un tercio.

Respecto de los procedimientos consultivos, su duración promedio ante la Corte ha sido de diez meses. Ordinariamente, las solicitudes de opiniones consultivas se refieren a asuntos excepcionalmente delicados del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por esta razón, la Corte dedica varios días al estudio y elaboración de investigaciones especializadas y a la deliberación, preparación y revisión de un proyecto de opinión consultiva. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias a que se enfrenta el Tribunal han exigido que se programen pocos días para las deliberaciones de los procesos consultivos.

En lo que atañe a las medidas provisionales, cuando el Tribunal las adopta no sólo impone al Estado la obligación de tomar ciertas acciones, sino también la de informar periódicamente acerca de ellas. Asimismo, impone a la Comisión Interamericana la obligación de presentar sus observaciones sobre estos informes. Consecuentemente, esta práctica exige al Tribunal reservar uno o dos días de cada sesión al estudio de estos informes periódicos.

Es pertinente anotar que en un esfuerzo por dar un máximo nivel de rendimiento a los recursos materiales que le brinda la Organización, durante sus sesiones ordinarias la Corte sesiona tanto en días hábiles como inhábiles y lo hace también en fines de semana.

### **Costos Operativos del Tribunal (Meta 10)**

Al no ser la Corte un tribunal permanente, su Secretaría tramita las actuaciones procesales y brinda soporte y seguimiento permanentes para que existan las condiciones necesarias para que el Tribunal resuelva los diferentes asuntos que se le someten durante sus cortos períodos de sesiones. Algunas de las actividades que realiza la Secretaría para cumplir con esos fines son las siguientes:

- manejar los asuntos administrativos y financieros del Tribunal,
- contratar los servicios profesionales necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
- brindar asistencia permanente a los jueces en sus funciones,
- brindar asistencia permanente a la Corte,
- dar trámite a las actuaciones procesales que se remiten al Tribunal,
- custodiar y mantener al día los expedientes correspondientes a cada caso,
- preparar los materiales necesarios para las audiencias,
- analizar e indexar los documentos y materiales probatorios que se remiten a la Corte,
- realizar estudios de doctrina y jurisprudencia,
- realizar investigaciones respecto de los casos en trámite ante la Corte,
- elaborar relaciones de hechos para los proyectos de sentencia,
- supervisar la traducción de los documentos emitidos por la Corte,
- seleccionar, publicar y distribuir los documentos emitidos por la Corte,

- atender solicitudes de información de otros órganos de la Organización,
- atender las consultas del público y la prensa respecto del sistema interamericano,
- atender solicitudes de publicaciones y
- en la medida de sus posibilidades, contribuir a la difusión del sistema en foros nacionales e internacionales.

Sin embargo, graves dificultades materiales y presupuestarias obstaculizan este trabajo de la Secretaría. Se requiere de comunicación expedita y cada vez más regular con el Presidente de la Corte y el resto de los jueces para la obtención de sus observaciones y criterios en asuntos que guardan relación con el desarrollo de los procesos, lo cual conlleva un incremento en los costos operativos. En el proyecto de presupuesto sometido a consideración de la Comisión de Asuntos Presupuestarios para el año 2001, estos costos, al igual que los costos de las metas anteriores, han tenido que ser incrementados debido al crecimiento y desarrollo del sistema de protección de los derechos humanos en el continente.

### **3. Cuadro del Año Fiscal 2000**

Aprobado por la Asamblea General de la OEA por un monto de US\$1,114,600.00. Este monto ha sido el mismo aprobado para los años 1997, 1998 y 1999. El año 2000 será el cuarto año consecutivo que la Corte Interamericana tiene que operar con el mismo presupuesto, dejando de lado el aumento en los costos de operación que se presentan año con año.

Ese presupuesto solamente permite el funcionamiento de la Corte con el mínimo de los recursos. Con un recargo de trabajo creciente, los números son alarmantes. Los gastos de operación de la Secretaría se mantienen al mínimo, con el consecuente deterioro de los servicios que se deben prestar para el adecuado trabajo de la Corte. Normalmente se deben hacer recortes o eliminar actividades importantes para no cerrar el año con déficit presupuestario.

Con fecha 23 de marzo de 2000, el Sr. James R. Harding, Subsecretario de Administración, envió un memorándum en el cual informaba que debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa la OEA, todas las áreas deben tomar las medidas necesarias para reducir en un 10% el nivel de ejecución del presupuesto asignado para el año 2000. Para la Corte, esto representa un monto del orden de US\$150,000.00 para lo que resta de este año. Esto obligará a repensar y redefinir la estrategia de trabajo de la Corte para lo que resta del año, pero principalmente afectará negativamente la realización de por lo menos dos sesiones que estaban programadas.

## ANEXO 15

<b>META</b>	<b>Año 2000</b>	<b>MONTO ANUAL</b>
META 1	Recursos humanos compuesto por abogados, asistentes y personal administrativo	668,813.51
META 2	Primera Sesión de Corte en Sede del Tribunal	48,668.65
META 3	Segunda Sesión de Corte en Sede del Tribunal	41,810.00
META 4	Tercera Sesión de Corte en Sede del Tribunal	47,710.00
META 5	Cuarta Sesión de Corte en Sede	47,710.00
META 6 <sup>3</sup>	Participación en Asamblea General	10,493.00
META 7 <sup>4</sup>	Reunión en Washington: CAJP, CAAP, Misiones y Departamentos de OEA	9,500.00
META 8 <sup>5</sup>	Reunión en Washington con CIDH	30,750.00
META 9	Curso de Comité Jurídico en Brasil	4,500.00
META 10	Costos de operación de la Secretaría	204,644.84
	<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1,114,600.00</b>

3 La asistencia del Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Corte a la Asamblea General de la Organización es una obligación que se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 65 dispone: "La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos."

4 Durante los últimos años, los representantes de la Corte han viajado a Washington D.C. con el propósito de cumplir con su obligación de presentar el informe anual de labores del Tribunal a la Honorable Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Con el objetivo de racionalizar al máximo los recursos con que le dota la Organización, los representantes del Tribunal aprovechan este viaje para presentar y justificar su presupuesto anual. Esta visita a la Sede de la Organización es de capital importancia para un organismo como la Corte Interamericana, que se encuentra alejado geográficamente de la sede e implica la confección de una agenda de aproximadamente veinticinco visitas oficiales del Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Corte a la Comisión de Asuntos Presupuestarios y a distintos Embajadores y Representantes Permanentes.

5 De conformidad con el mandato de la Asamblea General de la OEA AG/Res. 1041 (XX-0/90), la Corte y la Comisión Interamericana deben reunirse con el propósito de establecer "mecanismos de coordinación para que ambos órganos puedan, en el ámbito de su competencia, cooperar entre sí para una mejor protección de los derechos humanos." Hasta el día de hoy, la Corte ha promovido y aceptado la

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

#### 4. Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2001

La Corte ha sometido para aprobación de la Asamblea General de la OEA el proyecto de presupuesto de operación del Tribunal para el año fiscal 2001 con un aumento del 37% sobre el presupuesto del año fiscal 2000. Es decir, este proyecto representa un monto de US\$1,521,682.87. Se pretende con esta cifra mejorar la disponibilidad de recursos humanos para la adecuada operación del Tribunal, así como atender en forma más adecuada el desarrollo de las cuatro sesiones proyectadas para este año, las visitas a la Sede de la OEA y la operación general de la Secretaría.

META	Año 2001	MONTO ANUAL
META 1	Recursos humanos compuesto por abogados, asistentes y personal administrativo	820,774.87
META 2	Primera Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 3	Segunda Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 4	Tercera Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 5	Cuarta Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 6	Participación en Asamblea General de OEA	14,200.00
META 7	Reunión en Washington: CAJP, CAAP, Misiones y Departamentos de OEA	17,990.00
META 8	Reunión en Washington con Comisión Interamericana de Derechos Humanos	40,296.00
META 9	Curso de Comité Jurídico en Río de Janeiro	4,930.00
META 10	Costos de operación de la Secretaría	353,692.00
	<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1,521,682.87</b>

celebración de una serie de reuniones conjuntas con la Comisión, incluyendo las celebradas en San José en 1990, en Nassau en 1992, en Belém do Pará en 1994, en Miami en 1994 y en Washington D.C. en 1995 y 1996. En septiembre de 1997 tuvo lugar la séptima de estas reuniones en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica, en 1998 se realizó la octava reunión en la Sede la Comisión en Washington D.C., y recientemente en 1999, la reunión se realizó en la Sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Tanto en el proyecto de presupuesto para el año de 2001 como el aprobado para el año 2000, se ha previsto realizar al menos una reunión en pleno en Washington D.C. u otro lugar designado, así como reunir a las mesas directivas en ocasión de la celebración de la Asamblea General de la OEA.

Al momento de escribir este informe, el plan de los Estados Miembros es reducir en \$437,000, el presupuesto de la Corte propuesto para el año 2001. Como fue mencionado en la sección anterior, los Estados Miembros han asignado esta reducción a la categoría de las actividades para las cuales aún no se ha obtenido fuentes de financiamiento.

### 5. Proyección de las necesidades financieras de la Corte

A continuación se expone una proyección financiera para la Corte. Los números fueron proporcionados por la misma Corte, y representan una proyección respecto a dónde estará el sistema y a cuáles serán sus necesidades financieras en el futuro. Es preciso señalar que las cifras no incorporan nuevas ideas o metodologías de trabajo. Para fines ilustrativos, algunas de esas ideas y los costos que comportan son considerados en el Apéndice 2 de este informe.

El Tribunal se dio a la tarea de preparar un escenario presupuestario a mediano plazo para financiar su operación, tomando en cuenta las restricciones financieras y presupuestarias que enfrenta actualmente la Organización de los Estados Americanos.

<b>META</b>	<b>DETALLE PROYECCION CORTE</b>	<b>MONTO ANUAL</b>
META 1	Recursos humanos: abogados, asistentes y personal adm.	1,098,992.03
META 2	Primera Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 3	Segunda Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 4	Tercera Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 5	Cuarta Sesión de Corte en Sede del Tribunal	67,450.00
META 6	Participación en Asamblea General de OEA	14,200.00
META 7	Reunión en Washington: CAJP, CAAP, Misiones y Depts. De OEA	17,990.00
META 8	Reunión en Washington con Comisión I.D.H.	40,296.00
META 9	Curso de Comité Jurídico en Río de Janeiro	4,930.00
META 10	Costos de operación de la Secretaría	504,866.96
	<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>1,951,074.99</b>

## **B. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Finanzas y proyecciones**

### **1. Consideraciones generales**

Al analizar la evolución del sistema interamericano de derechos humanos y en particular el de la Comisión, relacionándola con los recursos humanos y económicos que ha tenido a su disposición a través de los años para el desempeño de sus tareas, veremos cuál ha sido el apoyo presupuestario que los Estados han brindado a la Comisión, la medida en que ésta se ha modificado en el tiempo, y la esencial correlación entre la producción del sistema –investigaciones, audiencias, visitas *in loco*, soluciones amistosas, casos ante la Corte, informes, etc.- y los insumos indispensables para su realización- financiamiento y recursos humanos disponibles.

Durante sus primeros años de funcionamiento, la Comisión no contaba con una Secretaría propia. La tarea de los Comisionados descansaba en el apoyo logístico y administrativo que le brindaban uno o dos abogados del entonces denominado Departamento de Asuntos Legales de la Secretaría General de la OEA. Esta ausencia de estructura es coherente con la visión limitada con que fue creada la CIDH en 1959. En el año 1967 la Comisión "se independiza" del Departamento de Asuntos Legales y cuenta con una Secretaría Ejecutiva, compuesta por cuatro profesionales, y un presupuesto de \$85.000.

A lo largo de los años setenta, caracterizados por masivas violaciones a los derechos humanos y la multiplicación de dictaduras en América Latina, la CIDH fue cimentando un merecido prestigio por su defensa de los derechos humanos.

Los años ochenta, que son los años de las transiciones a la democracia en el hemisferio, son también años de transición para la Comisión. En la medida que van desapareciendo las violaciones masivas y las dictaduras, la Comisión comienza a recibir nuevas y variadas demandas.

Así como se fortalecen las relaciones de los Estados, también se multiplican las relaciones entre la Comisión y una amplia red de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

La Comisión y su Secretaría se esfuerzan en adecuar su personal y recursos a la exigente nueva realidad; así, en 1990 la Comisión contaba con un personal de ocho abogados, cinco funcionarios administrativos y un bibliotecario con contrato por resultado. Actualmente la Comisión cuenta con 16 abogados y 9 funcionarios administrativos. A esta cantidad habría que agregar 2 abogados y una bibliotecaria con contratos por resultados y 6 secretarías contratadas por medio de agencias de empleos temporales.

A lo largo de los años 90, la actividad de la Comisión ha crecido de una manera sostenida, se han multiplicado los requerimientos de todo tipo y la Comisión ha realizado un conjunto de esfuerzos y de iniciativas para responder a esa nueva realidad.



A título de ejemplo, veamos algunos indicadores de la actividad de la CIDH: En la década de los 80, se habían elevado sólo 4 casos contenciosos a la Corte Interamericana, mientras que en los 90 se elevaron 31. En La década de los 80 sólo una medida provisional se presentó a la Corte, en cambio en la segunda década de la Corte, se presentaron 20 medidas provisionales. Así también, a lo largo de su historia, la CIDH ha llevado a cabo 77 visitas *in loco*<sup>6</sup>.

Mayor actividad aún se puede verificar en el sistema de casos individuales. La Comisión recibe más peticiones, tramita más casos y produce más informes. Actualmente la Comisión tiene alrededor de 1,000 casos en trámite. A su vez, los informes de casos se han robustecido ganando su extensión, detalle y profundidad del análisis jurídico.

Esta mayor actividad en el sistema de casos, tiene su expresión más obvia en la envergadura que ha alcanzado el informe anual que la CIDH eleva a la Asamblea General de la OEA. El informe que está dedicado en más de un 80% a los informes de casos, en 1989-1990 tenía un volumen de 195 páginas, en cambio el informe anual 1998, consta de tres volúmenes con un total de 1,600 páginas. A este cúmulo inmenso de trabajo habría que añadir los informes sobre países y los informes sobre estudios especiales.

El aumento de la actividad y de la producción de la Comisión ha sido particularmente notable en los últimos cuatro años. Esto se verifica en todas las áreas, ya que son más numerosos los informes sobre casos y países publicados; se ha duplicado el número de visitas *in loco*; así como los casos presentados y litigados ante la Corte Interamericana; se han aumentado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, las medidas provisionales solicitadas y tramitadas ante la Corte; así como los procedimientos de solución amistosa y las actividades de promoción.

Ciertas actividades de la Comisión tales como las visitas *in loco*, tramitación de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicación de algunos informes, impresión del informe anual, mantenimiento de la biblioteca, y algunos proyectos especiales como el "Fortalecimiento del Sistema Interamericano para la Defensa de los Derechos Humanos de Comunidades, Minorías Étnicas y Otros Grupos Vulnerables, Afectados por los Conflictos en Centroamérica" y la "Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios", entre otros, no hubieran podido llevarse a cabo sin el apoyo de contribuciones específicas a la Comisión.

### **Antecedentes de Presupuesto**

En términos financieros, en 1990 el presupuesto de la CIDH era de \$1,305.500. En los años siguientes se reciben leves aumentos, pero en 1996 se registra un aumento sustantivo, que permite duplicar la asignación presupuestaria de 1990. Este importante crecimiento fue la base

---

6 Del total de 77 visitas *in loco* que la CIDH ha llevado a cabo hasta la fecha, en la última década se realizaron 42 visitas a diferentes países de los Estados miembros de la Organización.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

---

para que la Comisión pudiera responder, al menos en cierta medida, a los desafíos que le planteaba la década del 90. Para el año 2000, la asignación presupuestaria es de \$3,133.700.

Como hemos visto, a partir del aumento considerable del año 1996, la Comisión ha tenido un incremento muy pequeño de su presupuesto. De los 3 millones de dólares asignados actualmente, \$2,091,300 millones se dedican al pago del personal de planta.

El monto para gastos operativos apenas alcanza a financiar las reuniones de la Comisión. La CIDH realiza dos sesiones ordinarias de 3 semanas de duración, además de 1 o 2 sesiones extraordinarias. Cada una de las sesiones de 2 semanas, tiene un costo de casi US\$150,000.00. En estas reuniones el gasto mayor se refiere a los costos de interpretación y traducción en dos idiomas; en las últimas sesiones de la Comisión estos gastos alcanzaron la suma de \$75,000.00.

Debido a lo limitado de su presupuesto, la Comisión tiene que hacer ajustes a medida que se presentan las necesidades durante el año, sin embargo para solventar algunas necesidades, la CIDH ha solicitado y obtenido fondos específicos tanto de países miembros de la Organización, como de países amigos de Europa. En los últimos años la Comisión ha recaudado un total de \$2,767,000; desafortunadamente, dada la naturaleza de estas contribuciones, la CIDH no puede planificar sus actividades con base en estos fondos, ya que es impredecible saber a principios de año con qué contribuciones se puede contar, la suma de dichas contribuciones, y las fechas en que las mismas serán recibidas.

Para poder hacer frente a todas sus necesidades, la Comisión seguirá buscando recursos adicionales en organismos de cooperación y en países amigos que deseen contribuir a proyectos especiales y a fondos específicos. Sin embargo, la responsabilidad primordial es la de los Estados miembros, que han creado el sistema y que deben dotarlo con los recursos que necesita para poder desempeñar su tarea de defensa y promoción de los derechos humanos en todo el hemisferio.

Los proyectos de presupuesto preparados por la Comisión se han elaborado agrupando las actividades de mayor relevancia llevadas a cabo por la CIDH. Seguidamente se hace una descripción general de las metas que componen las actividades de la Comisión, reflejada en su presupuesto y en los cuadros abajo presentados.

### **Meta N° 1**

Corresponde a los recursos humanos de la Secretaría, compuestos por un Secretario Ejecutivo, por dos Secretarios Ejecutivos Adjuntos y por el personal profesional, técnico y administrativo. También en esta meta se incluye una suma para la contratación de personal de apoyo, tanto abogados como secretarías, ya que el presupuesto de la CIDH, en el rubro respectivo, no permite la contratación de personal permanente.

Asimismo se incluyen en esta meta los gastos de operación de la Secretaría, tales como: tramitación de casos de soluciones amistosas, presentación de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viajes de promoción, asistencia a conferencias y seminarios, costo de alquiler de oficina<sup>7</sup>, compra de equipo y material de oficina, gastos de correo, teléfono, fotocopias, etc.<sup>8</sup>

### Meta N° 2

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al no ser un órgano permanente, desarrolla su trabajo en sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebran en su sede en Washington, D.C., para los cuales los miembros deben viajar desde sus países de residencia. Las sesiones de la Comisión normalmente se celebran en la sede, sin embargo, la Comisión por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros puede reunirse en otro lugar, con la anuencia o por invitación de cualquier Estado miembro de la Organización.

Durante sus períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones la Comisión se dedica al estudio y aprobación de informes de admisibilidad, solución amistosa y fondo sobre casos individuales presentados conforme a las normas de su Reglamento, y a la consideración de su envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión también analiza y aprueba informes sobre la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA. También dedica varios días de sus sesiones a la celebración de audiencias sobre casos individuales en trámite, el seguimiento de casos ya resueltos, así como la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros.

Asimismo, los miembros de la Comisión deliberan sobre otras cuestiones relacionadas con el mandato de promover y proteger los derechos humanos en el hemisferio, tales como la conducción de visitas *in loco*, las actividades derivadas de las relatorías temáticas, la aprobación de su informe anual y su presentación a la Asamblea General de la OEA.

### Meta N° 3

La CIDH realiza observaciones *in loco* con base en criterios de necesidad y conveniencia. En casos graves y urgentes, la CIDH puede realizar una investigación *in loco*, previo con-

---

7 [Nota de la Secretaría: Para los programas de la OEA, la Secretaría incluye un costo por el espacio de oficinas que es ocupado, dado que éste es parte del costo de un programa igual que aquellos correspondientes a personal y a otros costos. Si bien éste es cubierto por una cuenta central, es útil incluirlo para reflejar mejor los costos totales de un determinado programa.]

8 La CIDH tiene que presentar su presupuesto de acuerdo a la cifra indicativa señalada por el Departamento de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo. La cantidad asignada no es suficiente para cubrir todas las actividades de la Comisión, por lo que se tiene que recurrir a los fondos específicos, respetando la decisión de los gobiernos donantes quienes limitan sus donaciones para actividades específicas de la CIDH.

sentimiento del Estado respecto del cual se alega responsabilidad por alguna violación de los derechos humanos.<sup>9</sup>

#### Meta N° 4

Esta meta se refiere a la edición y publicación de documentos sobre las actividades que lleva a cabo la CIDH en el ejercicio de sus atribuciones en la defensa y promoción de los derechos humanos. Para dar un ejemplo del volumen cuantioso de esta actividad de la Comisión, trataremos de mencionar algunas de sus publicaciones tales como:

- a) Anuario Interamericano de Derechos Humanos, publicación anual que se envía a las escuelas de derechos en Universidades Latinoamericanas y del Caribe;
- b) Informe Anual de la CIDH el cual se presenta a la Asamblea General de la OEA. El Informe anual 1998-1999 consta de 1,600 páginas;
- c) Situación Derechos Humanos en diferentes países. En la última década se han publicado los siguientes informes:<sup>10</sup>
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en Brasil,
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en México
  - Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Rep. Dominicana.
  - Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Solicitantes de Asilo en el Marco del Sistema Canadiense de Determinación de la Condición de Refugiado.
  - Informe sobre los hechos ocurridos en las localidades de Amayapampa, Llallagua y Capasirca, Norte del Departamento de Potosí, Bolivia.

Actualmente se encuentran en preparación informes sobre la situación de los derechos humanos en Perú, Paraguay, y Guatemala.

---

9 Las visitas *in loco* que la CIDH ha llevado a cabo han sido financiadas con contribuciones específicas, ya que como puede apreciarse los recursos del fondo regular no son suficientes para cubrir esta importante actividad de la Comisión.

10 La CIDH ha publicado informes en diferentes años sobre un mismo país.

d) La CIDH también tiene otras publicaciones entre las que podríamos mencionar:

- Documentos Básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano,
- Cómo presentar denuncias en el Sistema Interamericano
- Afiche del estado de las firmas y ratificaciones de los diversos instrumentos de los derechos humanos,
- Informe sobre la Condición de la Mujer en las Américas.
- Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Indígenas en las Américas

### **Meta N° 5**

En esta meta se incluye el mantenimiento del Centro de Documentación de la Comisión con el mínimo de los recursos. Los gastos de operación de la Secretaría se mantienen al mínimo. Normalmente se tienen que eliminar actividades importantes por falta de recursos.

### **2. Presupuesto Año fiscal 2000**

El presupuesto detallado a continuación solamente permite el funcionamiento de la Comisión con el mínimo de los recursos. Los gastos de operación de la Secretaría se mantienen al mínimo. Normalmente se tienen que eliminar actividades importantes por falta de recursos.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

META	DETALLE 2000	
META 1	Recursos humanos <sup>11</sup>	\$2,091,300.00
	Contratos por resultado para abogados, secretarias y un bibliotecario	280,000.00
	Gastos de operación de la Secretaría <sup>12</sup>	233,000.00
	Alquiler y mantenimiento de oficina	146,200.00 <sup>13</sup>
META 2	Celebrar dos reuniones ordinarias de tres semanas cada una y una extraordinaria de una semana	375,000.00
META 3	Realizar visitas de observación <i>in loco</i> en países miembros <sup>14</sup>	0.00
META 4	Edición y publicación de documentos <sup>15</sup>	0.00
META 5	Mantenimiento de un centro de documentación y una biblioteca especializada (adquisición de publicaciones y suscripciones)	8,200.00
<b>APROPIACIÓN DEL FONDO REGULAR OEA</b>		<b>\$3,133,700.00</b>
<b>FONDOS ESPECÍFICOS</b>		<b>389,000.00<sup>16</sup></b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$3,522,700.00</b>

Cabe hacer notar que con fecha 23 de marzo de 2000, el Sr. James R. Harding, Subsecretario de Administración, envió un memorándum en el cual informaba que debido a la difícil situación financiera por la que atraviesa la OEA, todas las áreas deben tomar las medidas necesarias para reducir en un 10% el nivel de ejecución del presupuesto asignado para el año 2000.

11 Actualmente los Recursos Humanos de la Secretaría de la CIDH están compuestos por: 1 Secretario Ejecutivo, 2 Secretarios Ejecutivos Adjuntos, 13 abogados, 1 oficial administrativo y 8 secretarias.

12 Viajes a la Asamblea General de la OEA, audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asistencia a reuniones y seminarios, viajes de promoción, compra equipo de oficina, teléfono, fotocopias, internet, correo, etc.

13 El presupuesto aprobado por la CIDH para el año 2000 fue de \$2,987.5. Sin embargo a principios de este año se asignó la cantidad de \$146,200.00 para cubrir los gastos de alquiler de oficinas.

14 En vista que el presupuesto del fondo regular no es suficiente, se espera poder recibir la contribución de fondos específicos para poder llevar a cabo las visitas *in loco*. 3 visitas promedio, cuyo valor estimado es de \$40,000.00

15 En esta meta aparece la cifra 0.00 porque normalmente la misma se cubre con fondos específicos, en vista que el total del presupuesto del fondo regular no permite a la CIDH cubrir esta importante actividad.

16 Esta cifra es un promedio de fondos específicos recibidos durante los últimos 4 años. Cabe señalar que las sumas recibidas han variado marcadamente de año en año. No se reciben ni las mismas sumas ni en las mismas fechas ni se gastan necesariamente en su totalidad en el año en que se reciben.

### 3. Proyecto de presupuesto Año Fiscal 2001

La Comisión ha sometido para aprobación de la Asamblea General de la OEA el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2001 por la cantidad de US\$3,114.7, que es la cifra indicativa asignada a la CIDH. Sin embargo, como ya se explicó anteriormente, esta cifra no refleja la realidad de las necesidades actuales de la Comisión.

META	DETALLE 2001	MONTO
META 1	Recursos humanos	\$2,091,300.00
	Contratos por resultado para abogados y secretarias	280,900.00
	Gastos de operación de la Secretaria	238,000.00
	Alquiler de oficina	121,000.00
META 2	Celebrar dos reuniones ordinarias de tres semanas cada una y una extraordinaria de una semana	375,000.00
META 3	Realizar visitas de observación <i>in loco</i> en países miembros	0.00 <sup>17</sup>
META 4	Edición y publicación de documentos	0.00 <sup>18</sup>
META 5	Mantenimiento de un centro de documentación y una biblioteca especializada (adquisición de publicaciones y suscripciones)	8,500.00
<b>FONDO REGULAR OEA</b>		\$3,114,700.00
<b>FONDOS ESPECÍFICOS</b>		389,000.00 <sup>19</sup>
<b>TOTAL</b>		\$3,503,700.00

### 4. Proyecciones de la Comisión a mediano plazo

Las cifras proyectadas en el cuadro siguiente reflejan modestamente un crecimiento inevitable, debido al aumento de trabajo que ha venido experimentando la CIDH, tales como denuncias sobre casos de violaciones de derechos humanos, casos ante la Corte, visitas *in loco*, actividades de promoción, etc. Este pequeño incremento en el presupuesto se basa fundamentalmente en el supuesto que todas las actividades de la CIDH sean cubiertas con el fondo regu-

17 Estimado para una visita *in loco* con una duración de 3 días.

18 En esta meta aparece la cifra 0.00 porque normalmente la misma se cubre con fondos específicos, en vista que el total del presupuesto del fondo regular no permite a la CIDH cubrir esta importante actividad.

19 Esta es una cifra estimada, tomando como base las contribuciones promedio de los últimos 4 años.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

lar de la OEA y no que las mismas tengan que ser cubiertas con fondos específicos, como se viene experimentando desde hace muchos años.

Si comparamos el nivel de crecimiento de la década 1985/1995, y el del período 1995/2005, se notará que las cifras propuestas son relativamente modestas tomando en cuenta el aumento considerable de trabajo que la CIDH ha tenido en la última década y el aumento en el costo del nivel de vida.

<b>META</b>	<b>DETALLE Proyección</b>	<b>MONTO</b>
META 1	Recursos humanos <sup>20</sup>	\$2,700,000.00
	Gastos de operación de la Secretaría	390,000.00
	Contratos por resultado para un bibliotecario y apoyo administrativo	150,000.00
	Alquiler de oficinas	165,000.00
META 2	Celebrar 3 reuniones ordinarias de tres semanas y dos extraordinarias de una semana (2 idiomas)	700,000.00
META 3	Tramitación casos de soluciones amistosas, viajes de promoción y asistencia a conferencias y seminarios	100,000.00
META 4	Tramitar casos ante la Corte Interamericana de DD. HH.	215,000.00
META 5	Realizar visitas de observación <i>in loco</i> en países miembros (se estima poder llevar a cabo 4 visitas)	275,000.00
META 6	Edición y publicación de documentos	300,000.00
META 7	Mantenimiento de un centro de documentación y una biblioteca especializada (adquisición de publicaciones y suscripciones)	15,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,010,000.00</b>

### III. Análisis y repercusiones

Al comienzo de este trabajo pusimos el acento en que estamos operando en un marco de graves restricciones y limitaciones. Las proyecciones considerablemente conservadoras para la labor de la Corte y de la Comisión establecidas en la segunda parte de este trabajo, nos dan un indicio de la escala de los esfuerzos que son necesarios para atender las demandas presupuestarias futuras en materia de derechos humanos. El mandato del grupo *ad hoc* nos pide que

20 Para el año 2005, se estima poder contratar 5 abogados y 2 secretarías.



establezcamos las repercusiones que tiene para la Organización, si estos recursos se procuran del presupuesto regular de la OEA.

Antes de entrar en ese análisis, es útil poner sobre la mesa algunas ideas afines.

**Aumento de las cuotas:** Los aumentos de las cuotas han sido materia de algunas deliberaciones recientes dentro de la OEA. Sin emitir juicio alguno acerca de la dirección que llevan dichas deliberaciones, una cifra que se ha manejado es un 3% de aumento. Sea esto probable o no, sin embargo, un aumento general de las cuotas del 3% sólo significa aproximadamente US\$2 millones para toda la Organización. La asignación de una gran porción de un aumento de las cuotas, cualquiera sea el monto, para derechos humanos, es una posibilidad, pero sólo se puede lograr con el consentimiento claro y específico de los Estados Miembros a través de una resolución de la Asamblea General y/o en la resolución sobre el presupuesto.

También debe mencionarse que actualmente un grupo de Estados Miembros se encuentra atrasado en el pago de las cuotas a la Organización por un monto total aproximado de US\$45 millones. Las Normas Generales de la OEA disponen que los atrasos se depositarán en el subfondo de capital de trabajo y pueden ser utilizados para cubrir necesidades de caja a corto plazo en la expectativa de un aumento de las cuotas. El Consejo Permanente puede aprobar una apropiación extraordinaria de ese fondo para actividades por una sola vez. Desde un punto de vista realista, es improbable que un plan para asignar los recursos atrasados a un área específica tenga éxito.

**Financiamiento externo:** Independientemente de nuestra capacidad para cumplir las metas financieras dentro del presupuesto regular, los órganos de derechos humanos podrían y deberían procurar la obtención de financiamiento externo para impulsar sus operaciones. Actualmente esa es la práctica en varias esferas de la OEA, como puede apreciar el lector en el gráfico del apéndice 1 del presente informe. No obstante, es preciso señalar que para la esfera de derechos humanos en particular, se aplican los argumentos señalados anteriormente en relación con el financiamiento específico. Una premisa operativa básica de la que nuestros mecanismos de derechos humanos derivan buena parte de su preeminencia y legitimidad, es que son financiados por los propios Estados Miembros. Inclusive existe cierta tirantez derivada del hecho de que algunos países del sistema donan más fondos que otros. Cuanto más nos alejemos del concepto de que todos los Estados Miembros financian sus propios mecanismos para hacer cumplir los derechos humanos, mayores serán las posibilidades de distorsiones y de tirantez.

Sin embargo, existen operaciones y programas dentro de la OEA que son más directamente financiadas con recursos externos. Es decir que las dificultades del financiamiento externo afectan muy singularmente al sistema de derechos humanos por su naturaleza altamente política. La idea del financiamiento externo sigue teniendo mérito en el sentido de que puede utilizarse para crear un espacio en otros rubros del presupuesto regular y los fondos así librados podrían destinarse a esferas específicas como los derechos humanos.

### **Obtención de recursos del presupuesto regular: el juego de suma cero**

Aún utilizando una serie de hipótesis considerablemente generosas en relación con las cuotas, los atrasos y la inflación, es inevitable considerar que el presupuesto regular de la OEA está saturado. El presupuesto nominal ha disminuido casi un 11%, de US\$84,5 millones a US\$80 millones (US\$4 millones menos, para los que aún no hay financiamiento), desde aproximadamente 1995. En términos reales, el deterioro es mucho mayor. La obtención de los recursos necesarios a partir del presupuesto regular ya no puede ser un ejercicio de identificar y eliminar ineficiencias. Ese proceso ya se ha desarrollado durante un tiempo considerable y difícilmente rinda nuevos beneficios sustanciales.

Sin embargo, ha sido objetivo de la Secretaría General trasladar recursos a esferas esenciales de la nueva agenda hemisférica. Dado que los derechos humanos ya ocupan un lugar preeminente en la lista de prioridades, aun con un presupuesto nominal de la Organización que se reduce cada vez más, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no ha experimentado las grandes reducciones presupuestarias con que fueron penadas otras áreas de la OEA. No obstante, el beneficio para los derechos humanos ha significado naturalmente una pérdida para otras áreas de la Organización.

Este es el punto crucial del debate sobre la obtención de recursos dentro del presupuesto regular.

El Secretario General, por disposición estatutaria, puede trasladar recursos dentro del presupuesto por un monto acumulativo anual del 5%, mientras que no afecte materialmente ningún programa aprobado. En caso en que el cambio sí tenga esta repercusión, debe procurar aprobación del Consejo Permanente. Algunas áreas, incluida la de derechos humanos, se han beneficiado en cierta medida de esta disposición. Y podemos ir más lejos en este sentido. Los Estados Miembros podrían determinar que la Secretaría, en la medida en que se liberen recursos del presupuesto, los traslade a esferas prioritarias, quizás con la certificación del Inspector General para que el proceso sea lo más transparente y automático posible. Pero también es igualmente claro que este dispositivo registra una curva de resultados descendente; es difícil imaginar que este mecanismo dé el tipo de resultados que se procuran.

Lo que se requiere es una reestructuración más completa y racional de las prioridades del presupuesto. En el pasado reciente, los Estados Miembros han encomendado al Secretario General que procure esta reestructuración para someterla a la aprobación de los Estados Miembros. Y una y otra vez ese proceso no ha logrado un consenso suficiente para llegar a una conclusión viable. Ha quedado claro que la sola instrucción de los ministros a la Secretaría no basta para obtener los resultados deseados. Aún la inclusión de mandatos formales en resoluciones para conceder prioridad presupuestaria a una esfera específica, como la de los derechos humanos, no han dado resultados.

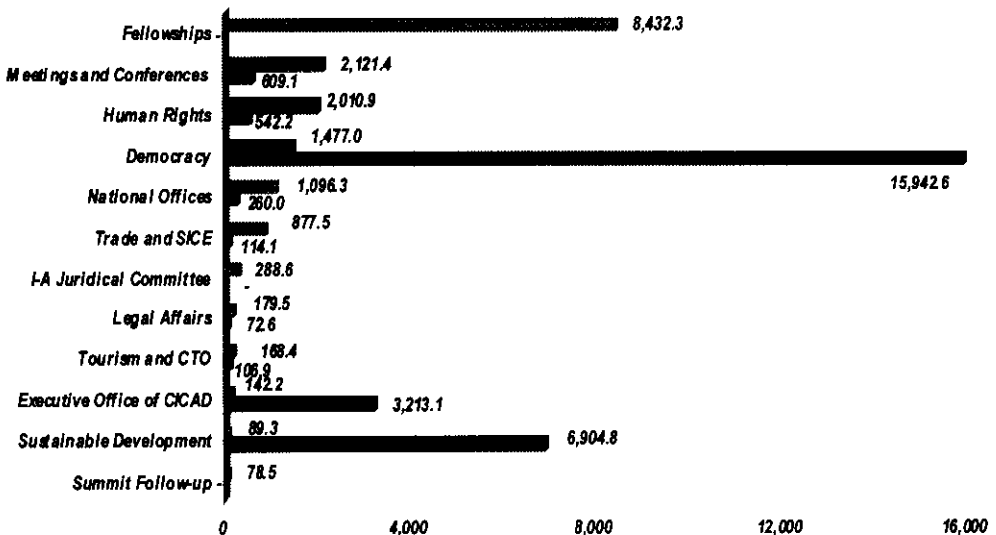
La reestructuración de las prioridades del presupuesto regular no es imposible pero se puede lograr solamente dentro de un proceso bastante estricto dirigido y acordado por los pro-

pios Estados Miembros. Esto podría ser logrado en un período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA o en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea convocado para ese propósito. El producto crítico e indispensable debe ser una decisión, fundada, por ejemplo, en una resolución, por la que se establezca un claro rumbo que reoriente las prioridades presupuestarias de la OEA en un juego de suma cero. Es decir, se debe articular con precisión a dónde deben ir los recursos y de dónde han de provenir.

El sistema interamericano de derechos humanos es, con razón, una de las principales prioridades en la labor de la Organización. Quizá también sea verdad que exista un gran vacío entre la prioridad articulada del sistema de derechos humanos en nuestro temario hemisférico y la relativa escasez de fondos que hemos podido orientar a esa labor. En tal sentido, podemos y debemos encontrar mecanismos para atender las necesidades presupuestarias del sistema a efectos de mantener su eficacia y su protagonismo en nuestra arquitectura hemisférica. Podemos y debemos también procurar medios creativos para atender esas necesidades presupuestarias. En la medida en que apuntemos al presupuesto regular de la OEA para atender esas necesidades, es indispensable que los propios Estados Miembros fijen referencias específicas a las prioridades presupuestarias y que luego se materialicen en un producto legislativo específico. La Secretaría General está preparada para brindar su asistencia en todo lo que sea posible y a implementar las instrucciones de los Estados Miembros.

**APPENDIX I. Priority Areas: 1999 Regular and Specific Funds**

**Non-Personnel Execution**  
(US\$ thousands)



■ 1999 Specific Funds ■ Regular Fund Execution 1999

## **Apéndice II. Otras ideas y su costo**

A efectos de establecer cifras lo más claras posible para el análisis de los ministros y sus representantes, las hipótesis que se manejan en este estudio no contemplan deliberadamente nuevas iniciativas importantes. Sin embargo, creemos importante estar informados de los costos adicionales que podrían derivar de algunas ideas que ya se están debatiendo.

Pero las ideas y los costos respectivos no deben interpretarse únicamente como costos adicionales. La Secretaría considera que, como parte de nuestra tarea constante de racionalización y búsqueda de nuevas formas de hacer el funcionamiento de la OEA más eficiente, se podrían encontrar algunas soluciones sencillas en una nueva manera de desarrollar las actividades, aunque ello entrañe un costo inicial adicional.

Por supuesto que las cifras son meramente especulativas, pero creemos que estos datos pueden ser de utilidad para los Estados Miembros.

### **I. Una Corte Permanente**

Se ha preparado un proyecto de presupuesto por una suma de 6,061,224.57 millones de dólares que, en forma modesta, podría permitir el funcionamiento permanente de la Corte IDH, con siete jueces residiendo en la Sede del Tribunal y que le permitiría a la Corte contar con el soporte necesario para sufragar los gastos correspondientes a las actividades que se realizan durante un año que representan la operación necesaria para que la Corte pueda cumplir con las altas funciones que le asigna al Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto contempla el pago de los señores jueces, personal de Secretaría, Área Legal, Biblioteca y Administrativo que laboran en el trámite de los casos, así como en las operaciones normales de la Corte según corresponde. Sin embargo este presupuesto no incluye ampliaciones o mejoras sustanciales a la actual planta física que alberga la Sede de la Corte. Se han tomado en cuenta también las previsiones necesarias para las audiencias públicas que lleva a cabo el Tribunal anualmente (28 audiencias públicas al año del Tribunal), la presentación del Informe Anual de la Corte a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, la participación en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y todo lo relativo a los gastos de operación del Tribunal que se incrementan por el aumento en el volumen de trabajo.

Como se ha indicado, esta última propuesta de 6.1 millones es solamente una proyección de gastos tomando en cuenta la presencia de los siete jueces actuales en la Sede de la Corte, pero manteniendo constante los demás servicios que actualmente presta la Secretaría para el funcionamiento del Tribunal. Tomando en cuenta el número de casos que actualmente se encuentran pendientes de solución en el sistema, este monto de presupuesto podría mantener la operación de la Corte al menos en el mediano plazo, cinco años. Si hubiese un aumento de casos se hace necesario revisar la proyección inmediatamente puesto que el monto mencionado no cubriría los gastos de operación y necesariamente se debería hacer revisiones anuales. Esta

proyección supone el mantener al Tribunal en el mismo edificio donde se encuentra actualmente.

<b>DETALLE</b>	<b>MONTO ANUAL</b>
Recursos humanos: jueces, abogados, asistentes y personal administrativo	3,103,159.07
Costo sesiones en primer trimestre	472,150.00
Costo sesiones en segundo trimestre	475,150.00
Costo sesiones en tercer trimestre	472,150.00
Costo sesiones en cuarto trimestre	472,150.00
Participación en Asamblea General de OEA	14,200.00
Reunión en Washington: CAJP, CAAP, Misiones y Departamentos de OEA	
Reunión en Washington con Comisión Interamericana de Derechos Humanos	
Curso de Comité Jurídico en Río de Janeiro	4,930.00
Costos de operación de la Secretaría	1,047,355.50
	6,061,224.57

## **II. Notas para la propuesta de crear una fiscalía con el fin de aumentar la capacidad investigadora del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos**

En el debate que se ha venido realizando sobre las medidas que deberían tomarse para reforzar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, se ha planteado que –sin pretender hacer una lista exhaustiva de las cosas que es necesario mejorar–, sería de gran utilidad (1) fortalecer la capacidad investigadora del sistema; (2) reducir la duplicación de tareas que existe entre la Comisión y la Corte; (3) establecer vínculos más sólidos con las autoridades nacionales; (4) dar a los ciudadanos más acceso al sistema; (5) incrementar el número de casos tramitados; (6) reducir el tiempo de tramitación de los casos; (7) incrementar el número de casos enviados a la Corte; y (8) adoptar procedimientos uniformes y más transparentes.

Para avanzar hacia la consecución de las metas enunciadas, de manera inmediata y a un costo relativamente bajo con respecto a los beneficios que podrían obtenerse, el sistema debería tomar medidas para proteger y aprovechar al máximo los limitados recursos con los que cuen-

ta. En este orden de ideas, la Secretaría General tiene razones para creer que haciendo algunos cambios a los reglamentos y sin necesidad de hacer cambios a la Convención, se podría contribuir sustancialmente a alcanzar dichas metas si (1) se refuerza la capacidad investigadora del sistema mediante la creación de cuerpos especializados de investigación e instrucción dentro de la Comisión y la Corte (unidades investigadoras), y (2) se adoptan mecanismos que armonicen la actividad de ambas instituciones en lo referente a la recolección de pruebas.

Ninguna de las medidas que en este documento se proponen limita de modo alguno la jurisdicción ni la competencia de la Comisión o la Corte. Lo único que se busca con ellas es permitir, sin mayores inversiones ni ajustes normativos, una utilización más eficiente de los escasos recursos disponibles.

A continuación se hace primero un análisis general de la contribución que fortalecer la capacidad investigadora y armonizar los procedimientos probatorios de la Comisión y la Corte harían a la solución de los problemas del sistema enunciados en el primer párrafo; en segundo lugar se hace una presentación de los elementos, la estructura y los costos que podrían servir como punto de partida para las medidas que en este documento se proponen.

### **Fortalecimiento de la capacidad investigadora del sistema**

Los organismos con los que cuenta actualmente el sistema para esclarecer los hechos que dan origen a las denuncias que se reciben tienen un cúmulo de responsabilidades que no les permite, por su misma naturaleza, dedicar todos sus esfuerzos a la labor probatoria. La unidades investigadoras, con una estructura y un personal dedicado exclusivamente a estas tareas contribuirían a llenar este enorme vacío.

La unidades investigadoras contribuirían a fortalecer el sistema (1) reorientando recursos única y exclusivamente a adelantar investigaciones, y (2) incorporando el principio que los organismos especializados son generalmente los más competentes, eficientes, y calificados para cumplir una determinada misión.

Como se sabe, en materia penal, el principio de la especialización ha sido utilizado con éxito por el sistema acusatorio. Este sistema establece una separación categórica entre las autoridades que investigan y califican los hechos y las que toman las decisiones en la etapa del juicio. Esta característica ha creado condiciones propicias para el desarrollo de la figura de la fiscalía, instancia investigadora y acusadora especializada que ha dado resultados positivos difíciles de alcanzar dentro de un sistema inquisitorio —el cual, como se sabe, obliga a los jueces no solo a dirigir el juicio y fallar sino a asumir además la dispendiosa labor de investigar e instruir los procesos. Por todo esto, el sistema acusatorio se ha venido convirtiendo en el modelo a seguir cuando se busca reforzar la capacidad investigadora de cualquier sistema jurisdiccional. En la medida en que el sistema interamericano se mueva hacia la adopción del principio de la especialización desarrollado por el sistema acusatorio, se dará un paso importante en el fortalecimiento del mismo.

La existencia de las unidades investigadoras de ninguna manera implicaría que los miembros de la Comisión o los jueces de la Corte quedarían marginados de la investigación. Los miembros de la Comisión podrían en todo momento ordenar la práctica de las pruebas que consideren necesarias. Pero, al contrario de lo que hoy sucede, no tendrían que dedicar gran parte de su tiempo a la práctica de dichas pruebas, sino que tendrían la libertad, si así lo deciden, de concentrarse en la tarea primordial de preparar sus decisiones. La Corte tampoco sufriría ninguna limitación a su autoridad investigadora. Por el contrario, la Corte podría dedicar más tiempo a preparar sus sentencias mientras que su unidad investigadora se dedica a trabajar con la unidad de la investigadora de la Comisión para recolectar adecuadamente las pruebas.

### **Reducir la duplicación de tareas**

En el contexto actual la Corte generalmente duplica buena parte de la labor probatoria realizada por la Comisión. El esquema que se propone contribuiría a reducir sustancialmente dicha duplicación mediante (1) la adopción de procedimientos probatorios aceptables a la Corte que se utilizarían desde el comienzo mismo de la investigación por parte de la Comisión, y (2) la participación activa de la Corte, a través de su unidad investigadora, en las actividades probatorias que realizaría la Comisión a través de su propia unidad investigadora.

### **Incrementar el número de casos tramitados**

Aunque el objeto de las unidades investigadoras que se proponen es el de utilizar de manera más eficiente los limitados recursos del sistema, no el de aumentar el número de casos tramitados, es razonable pensar que fortalecer la capacidad investigadora del sistema y aliviar la carga de los miembros de la Comisión y de la Corte con respecto a la práctica de pruebas resultará en un incremento del número de casos tramitados.<sup>21</sup>

21 Podríamos mencionar también que una mayor claridad en lo referente a la situación jurídica de cada una de las partes frente a la Corte podría resultar en una utilización más eficiente de los recursos del sistema.

Hemos dicho desde hace tiempo que una vez que la Comisión ha adoptado la decisión de remitir un caso a la Corte, la Comisión no debería transformarse en defensora del peticionario sino que, preservando su imparcialidad, debería convertirse en ministerio público. En efecto, si bien los representantes de la víctima participan de hecho como asesores de la Comisión en los asuntos contenciosos ante la Corte, éstos no gozan de una autonomía de funcionamiento respecto de la Comisión (*jus standi*), autonomía que podría ser necesaria para defender sus intereses —los cuales no serán siempre coincidentes con los de la Comisión, bien en su papel actual o en el de ministerio público. Tampoco pueden los representantes referirse a cuestiones procedimentales o participar activamente en las diligencias probatorias que ordene la Corte a menos que lo hagan a través de la Comisión, la cual podría negarse a hacerlo por tener posiciones diferentes con respecto a alguno de los aspectos mencionados. Finalmente, la falta de autonomía de los representantes de las víctimas en los trámites ante la Corte genera, en las palabras del Juez Cançado Trindade "...un desequilibrio entre las partes, en favor de los gobiernos demandados...".

Creemos que otorgar a las víctimas un derecho más amplio de participar en el trámite ante la Corte conduciría a especificar con mayor claridad y eficiencia los asuntos jurídicos que deberían ser sometidos a

## **Establecer vínculos más sólidos con las autoridades nacionales**

Una de las ventajas claras de establecer vínculos más sólidos con las autoridades nacionales y de apoyarse en ellas es que se obtendrían significativos beneficios económicos y logísticos en el corto plazo. En este contexto, las autoridades nacionales podrían prestar apoyo específico que liberaría recursos del sistema interamericano, apoyo que estaría sujeto a la decisión de la Comisión y de la Corte, según fuere el caso.

Por tratarse de entes técnicos y especializados, las unidades investigadoras podrían convertirse en importantes herramientas para acometer la necesaria tarea de establecer vínculos más ágiles, sólidos, y productivos con las autoridades nacionales.

Entendemos que establecer estos vínculos no es tarea fácil porque el caso mismo puede crear tensión entre la posición de instancias domésticas y el sistema interamericano, pero estamos convencidos que a pesar de las dificultades nunca ha habido un mejor momento para intentarlo. La democracia ha permitido que más que nunca las autoridades nacionales y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos puedan actuar como aliados. También ha creado condiciones favorables para la creación y el fortalecimiento de instituciones, como el *ombudsman* y las fiscalías, que podrían llegar a convertirse en un apoyo importante para el sistema.

Naturalmente, el sistema interamericano no renunciará en ningún momento a decidir si es conveniente o no apoyarse en un sistema nacional, y, de serlo, a señalar las instituciones o los jueces de los cuales se recibiría el apoyo y los términos dentro de los cuales dicho apoyo sería aceptable.

Los posibles beneficios de esa colaboración son significativos. Por ejemplo, el sistema se beneficiaría de contar con el apoyo decidido de las instituciones nacionales, particularmente de las encargadas de administrar justicia y de proteger los derechos humanos. Otro ejemplo de los beneficios que podrían obtenerse a través de esta cooperación sería el de crear condiciones favorables para que los sistemas nacionales conozcan más de cerca el sistema interamericano de derechos humanos.

## **Elementos y estructura**

Los elementos y la estructura de las unidades investigadoras que aquí se proponen son sencillos, no conllevan grandes esfuerzos normativos ni presupuestales, permiten ajustar el tamaño de las unidades al número de casos en el sistema, contribuyen a armonizar los procedimientos probatorios de la Comisión y de la Corte, y pueden ponerse en marcha con los recursos disponibles. Como el objetivo de este ejercicio es utilizar más eficientemente los recursos

decisión de los jueces. Esto podría contribuir a generar, con el tiempo, un proceso más compacto, transparente, y equitativo.



del sistema y no el de crear nuevos cargos y costos, se parte de la base que cada una de las unidades de investigación será creada utilizando hasta donde sea posible los recursos existentes. Los cambios consistirían específicamente en crear tanto dentro de la Comisión como de la Corte un cuerpo especializado en investigar e instruir procesos, que aquí llamaremos unidades investigadoras. Estas unidades utilizarían un procedimiento uniforme para la recolección de pruebas y trabajarían en colaboración estrecha para eliminar la necesidad de repetir durante el trámite ante la Corte pruebas practicadas en la etapa ante la Comisión, sin que esto signifique recorte alguno al poder de la Corte para repetir o practicar pruebas cuando lo considere necesario de acuerdo con las normas que la rigen. Por supuesto, los cambios que se han propuesto buscan minimizar la necesidad de practicar dos veces la misma prueba.

*Unidad investigadora de la Corte:* Esta unidad tendría su sede en San José, Costa Rica. Sus funciones, sujetas a las normas de la Corte y las instrucciones de los jueces, serían las de adelantar las investigaciones y realizar la práctica de pruebas; especificar los protocolos, procedimientos, y prácticas que deben observarse para que las pruebas practicadas por una unidad similar que se crearía en la Comisión sean aceptables y útiles a la Corte; asesorar a la unidad investigadora de la Comisión en los protocolos, procedimientos y prácticas a los que debe ajustarse para que las pruebas que practique sean aceptadas por la Corte; practicar las pruebas que ordene la Corte; y recomendar mecanismos para fortalecer la coordinación con la unidad investigadora de la Comisión. Además la unidad debería verificar que la unidad investigadora de la Comisión cumpla con dichos protocolos, procedimientos, y prácticas, responsabilidad que debería recaer en la unidad investigadora de la Comisión.

Como primer paso hacia la creación de esta unidad, proponemos la creación del cargo de jefe de la misma dentro del marco de la Corte. Este nuevo cargo podría tener las características y costos descritos al final de este documento, y debería tener la autoridad para seleccionar el personal asignado a la unidad, asegurándose que cumplan con los requisitos de estudio, entrenamiento, profesionalismo, e idoneidad. El jefe de la unidad cumpliría ésta y todas sus funciones bajo la autoridad de la Corte, y cuando ésta no esté reunida, bajo la presidencia de la misma.

En un comienzo, los jefes de las unidades deberían seleccionar funcionarios de la Comisión o de la Corte para conformar su respectivo equipo. Si bien la adopción de este procedimiento podría causar inicialmente problemas de ajuste en el área de personal, las ventajas de este esquema no tardarían en ser evidentes, y podrían eventualmente traducirse en una distribución más eficiente de la carga laboral de los funcionarios de ambas instituciones. Las calidades profesionales de las personas que formarían parte de las unidades investigadoras deberían ser objeto de especial atención en el momento en que el jefe de la unidad proceda a conformar su equipo. Este debería seleccionar profesionales de alto calibre intelectual y con el entrenamiento, la motivación, la experiencia específica, y la trayectoria adecuadas.

*Unidad investigadora de la Comisión:* Al igual de lo que sucede dentro del marco de la Corte, el primer paso que proponemos es la creación del cargo de jefe de la unidad investigadora de la Comisión, con características y costos que podrían ser similares a los que aparecen abajo.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

---

A medida que las unidades acuerden criterios uniformes para la práctica de pruebas, los jefes de ambas unidades tendrán la tarea esencial de garantizar que la actividad probatoria, particularmente la de la Comisión, cumpla con esos exigentes criterios, de tal manera que no existan dudas sobre la validez de la prueba en caso de que ésta se necesite durante la instancia ante la Corte. A lo largo de este proceso, el jefe estará siempre sometido a la autoridad de los miembros de la Comisión, y cuando la Comisión no esté reunida, a la presidencia de la misma.

Tal como lo hicimos con la Corte, y con base en los mismos argumentos, nos atrevemos a sugerir a la Comisión que podría lograr una distribución más eficiente de la carga laboral de sus funcionarios si asigna algunos de ellos a la unidad investigadora.

En este esquema, al llegar a la Comisión un caso que ésta considere que debe investigarse, los miembros de la misma darán instrucciones a su unidad investigadora para que proceda a adelantar las investigaciones y a practicar las pruebas que sean del caso. Mientras la unidad cumple con esa tarea, los miembros de la Comisión podrán, sin perder el control de la investigación, dedicarse a preparar sus decisiones. Al mismo tiempo, las unidades investigadoras deberán mantener contacto permanente, y colaborar para que la práctica de las pruebas se ajuste a los requerimientos de la Corte. Estas actividades podrían crear las condiciones propicias para el desarrollo de un vínculo institucional que facilite y promueva la comunicación fluida y la cooperación armónica entre la Comisión y la Corte.

Hacia el futuro, los costos de la unidades investigadoras serían en gran medida una función del tamaño que se les quiera dar y del número de casos en el sistema. En un extremo podría pensarse en unidades investigadoras tales como las que se han esbozado en los párrafos anteriores. En el otro extremo podría pensarse en unidades investigadoras con muchos funcionarios, con la capacidad de tener oficinas principales en Washington y San José, oficinas temporales en aquellos países que lo soliciten, y los recursos humanos, financieros, técnicos y logísticos para poder enviar grupos de investigadores a cualquier lugar del hemisferio apenas ocurran hechos que lo justifiquen.

Por ahora las realidades presupuestales e institucionales nos obligan a pensar solamente en la alternativa más modesta pero no por ello menos importante o significativa.

#### **Jefes Unidades Investigadoras de la Comisión y la Corte**

DESCRIPCION	GRADO	RUBRO	CANTIDAD
Especialista Derechos Humanos	P-5	01	\$100
Especialista Derechos Humanos	P-5	01	\$100
<b>TOTAL</b>			<b>\$200</b>

Cifras en miles de dólares

# FINANCING THE INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM

APRIL 28, 2000

*A Report Prepared by the Office of the Secretary General of the Organization of American States for the Ad Hoc Working Group on Human Rights, created by the Foreign Ministers meeting of 22 November 1999 held in San Jose, Costa Rica.*

## Introduction

Human rights promotion and protection has always stood among the principal mandates of the OAS. To make real that vision of collective action, the member states of the Organization created the inter-American human rights system. Its two organs, the Washington based Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the San Jose based Inter-American Court of Human Rights (the Court) have earned a respect perhaps unequalled in the history of our hemispheric institutions.

There has emerged, however, a clear sense that funding for the human rights system has grown inadequate. What is required is, first and foremost, is greater resources dedicated to the system. Additionally, a more rational and predictable source of funding would dramatically redress some of the system's current difficulties.

This paper seeks to address a specific issue posed by the ad hoc group on human rights, which was created by a group of the hemisphere's foreign ministers meeting in San Jose, Costa Rica on 22 November 1999. That specific concern goes to the implications for the OAS's regular budget of servicing the needs of the human rights organs.

To answer the question, we propose first to frame the issue within the larger picture of the current OAS financial state, followed by a focus on the finances of the human rights organs themselves. Next, we will lay out two projected financing scenarios using data provided by the IACHR and Court. For the sake of simplicity, the scenarios essentially assume that the basic operation of the mechanisms themselves will be largely unchanged over that time. But, it is also useful to illustrate the separate cost of new and additional ideas, which we do in APPENDIX 1. In the final section, we attempt to tie together and contextualize the money discussion, and analyze the implications this has for the OAS, its regular budget and for the member states as well.

## **I. Finances of the OAS: A Bad Situation Getting Worse**

The financial picture of the OAS has been difficult for years, and is likely to get worse. We expect that the Organization's revenues will continue on a downward track in both nominal and real terms. There are a number of explanations for this trend.

In the first place, revenues received by way of quotas, the most important source of financing for the Organization (95% in 1999) have been steadily declining, in both real and nominal terms, since 1996.

In nominal terms, quota revenues amounted to only \$67.5 million in 1999, compared to \$67.6 million collected under this heading in 1998. Moreover, it must be noted that of all the revenues received during the past year, \$36.0 million (53.3%) corresponded to quota payments for the year 1999. The difference, \$31.5 (46.7%), came in the form of makeup payments on previous years' quotas.

The Organization's quota revenues in real terms have been falling since 1995. This is because the quota schedule has not been amended since 1994 when it was set at \$73.7 million (effective as of 1995), meaning that increases in inflation have since reduced the financial capacity of the Organization.

Since the Organization has operated each year with fewer resources in real terms, it may be said that the Secretariat has generated savings for member countries in the order of \$25 million in real terms between 1995 and 2000. These savings have in effect been achieved two ways: on the one hand, by increasing the Secretariat's productivity and efficiency, and on the other hand by reducing the amounts devoted to certain mandates for which sources of funding could not be obtained. Some of the cutbacks we have achieved are the result of reduced activity in areas that were indicated as priorities by member countries, but which, because of financial constraints, could not be executed.

The Secretary General has reiterated his belief that making cuts in this way is not a proper function of the Secretariat, since our duty is to carry out and comply with the mandates of the member states as effectively as possible. When saving means failing to carry out everything we have defined as priorities, this is not saving, but rather a loss in terms of the services that the Organization should be providing. Nevertheless, because of budgetary problems (the freezing of quotas) and liquidity problems (failure to pay quotas), the Secretariat has been obliged to tailor its services to its financial constraints.

### **A. Understanding This Year's Budget : The Regular Fund**

The budget of an organization such as ours reflects its political priorities; in our case these are expressed through the mandates approved by the General Assembly. For example, this year the budget presented amounts to \$80 million from the Regular Fund, a figure that results

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

from valuing and quantifying the priorities earmarked in the budget for the year 2000, with additional provisions for new mandates and obligations.

By instruction of the General Assembly the draft budget will not exceed \$80 million, assuming the sum actually received in quotas payments reaches that level.<sup>1</sup> This represents the sum of member state quotas, estimated interest income, technical and administrative support contributions from the Specific Fund, as well as other revenues.

This year, in order to reflect the General Assembly's mandate with respect to sources of financing, the Secretariat has opted to divide the presentation of the budget into two broad categories:

The first corresponds to activities currently performed by the Secretariat. This budget of \$76 million, which, as discussed below, would be financed with revenues that the Secretariat expects to receive during the year 2001. This assumes that member countries will pay all of their assigned quotas for the year 2001, in a total amount of \$73.7 million.

The second category, amounting to \$4 million, corresponds to mandates and activities for which no source of funding has as yet been secured. This \$4 million in activities will only be executed if the Organization obtains additional revenues through an increase in current quota levels, higher interest revenues, or increases in technical and administrative support contributions from the Specific Funds.

The budget for the year 2001 represents an effort to maximize available resources, taking account of the economic situation facing our member countries, as well as the political priorities that they have established. Still, it must be noted that during the process of preparing the budget, additional mandates and requirements were identified, which could not be included within the \$80 million. These requirements amount to an additional \$3.7 million. The shortfall between the Court's 2001 proposed budget of roughly \$1.5m and the allocated budget of \$1.1m falls into this category.

### **Distribution of funds by sectors and priority areas**

Resources from the Regular Fund are distributed in accordance with priority areas. We have set out this information below, and additionally in APPENDIX 1 in chart form:

- General administration areas will receive \$17.4 million (21.8%), and support for political bodies \$15.6 million (19.5%).
- The Executive Secretariat for Integral Development, of the Inter-American Agency for Cooperation and Development (IACD), will receive \$11.8 million (14.7%). Of this, \$8.7

---

1 (AG/RES.1697)

million (10.8%) will go to fellowships. The remaining \$3.1 million (3.9%) will be devoted to IACD cooperation and administration expenses.

- Conferences and meetings of the political bodies: \$7.9 million (9.8%).
- General Secretariat offices in member states: \$6.5 million (8.1%).
- **Human Rights \$4.6 million (5.7%), which is approx. IACHR \$3.5m, (4.4%), Court \$1.1m (1.4%).**
- Democracy, \$3.4 million (4.3%)
- \$300 thousand has been included (0.4%) to carry out mandates from the General Assembly in Canada.
- Shares to other priority areas are as follows: Trade \$2.3 million (2.9%), Legal Affairs \$3.4 million (4.2%), Executive Office of CICAD \$2.4 million (3.0%), Sustainable Development \$1.7 million (2.2%), Tourism and Caribbean Tourism Org. \$0.7 million (0.9%).

#### **B. Specific funds (previously known as voluntary funds)**

In 1999 about \$37.0 million was received in country contributions to specific funds. These resources have allowed the Secretariat to finance programs in priority areas through the use of external funds.

In particular, for four areas, resources from the specific funds were essential for the conduct of the Organization's activities during 1999:

- The Unit for Sustainable Development executed programs amounting to about \$6.9 million, of which only 17.5% was financed with money from the Regular Fund.
- CICAD executed programs amounting to \$3.2 million, of which only 34.5% was financed with money from the Regular Fund.
- The UPD executed programs amounting to \$15.9 million, of which only 16.3% was financed with money from the Regular Fund.
- **HUMAN RIGHTS executed programs amounting to 4.5m, of which 88% was financed from the regular fund.**

The Secretariat will continue seeking to attract external resources for financing the Organization's mandates and activities during the year 2001.

## II. Finances of the Human Rights Organs

Compared to other areas of the OAS in the budget, the Human Rights system has fared well. This is, of course, a reflection of the priority the member states give to this part of the organization's work.<sup>2</sup> In significant ways, however, the human rights organs are also casualties of this difficult financial picture.

### Specific Funds and Human Rights

Although our analysis concentrates heavily on the system's funding from within the regular fund, it is important to understand the impact on this discussion of specific funds.

The general financial difficulties has meant that both organs of the system rely heavily on specific funds. Specific funds are open to contributions from virtually any source or country, including member states contributing over and above their regular fund quota. It is important to stress that these specific funds have been, and are today, used for basic mandated operations. For example, the IACHR has used specific funds for onsite visits, costs associated with arguing cases before the Court, the *relatorias*, information management development, document publication -- including the Annual Report -- and for improving library services. Representing a more traditional use for specific funds, the IACHR has also used them to supplement work on indigenous rights, publishing a manual on Human Rights, and donating human rights materials to Latin American Universities.

The Court, in turn, has used specific funds to support the publications department (equipment and human resources) and with documents, articles and books -- as well as the Court's web page. Additionally, the Court uses specific funds to support costs of local hiring of administrative personnel and legal assistants. The European Union completed a one-time grant to the Court this year to update the Court's publications, including their Annual Report.

Specific funds in particular are tied to expressed interests of individual member states. They are also closely linked to member states ability and willingness, perhaps responding to their own fiscal difficulties, to donate funds. They are not funds that can be counted on year to year to fund operations. Put another way, given general hard times, reliance on specific funds over the years has introduced distortions into the financing scheme in which both the IACHR and Court must operate. The issue is not unique within the OAS system to its human rights

2 Other comparisons are illustrative, however. Whereas the OAS spends 5.2% of its budget on human rights, the European Court of Human Rights enjoys a much greater budget priority within the work of the Council of Europe (COE). Of the COE's 1999 total budget of over 1 billion French Francs, 19% --- roughly US\$ 147m --- went to the Court and other human rights programs. Although this number is difficult to extract neatly from the COE budget, a Court officer reported the Court's yearly **operating** budget as 164m FF --- roughly US\$24m. Additionally, the COE sponsors human rights work with other organizations not included in these figures. (HRLJ, Vol. 20, No.1-3, p.114)

organs. But a strong case can be made that because of the nature of the human rights system and its unique relationship to the member states, the problem in this sphere is particularly prejudicial. For example, far from planning human rights work depending on where the needs are most pressing, often times the available or forecasted budget will drive the year's human rights work-plan, including that year's number of onsite visits, the number of sessions, the number of publications, etc.

A critical part of the problematique of the financing issue for the human rights organs, then, is to rationalize the issue of funding sources.

## **A. Inter-American Court of Human Rights: Finances and Projections**

### **1. GENERAL CONSIDERATIONS**

The return to democracy in most of the countries in the region has not meant a downturn in the numbers of human rights cases filed before the system. Quite the reverse. As repressive regimes release their grip, greater social transparency exposes a large number of areas where fundamental rights are violated, and also the relative incapacity of some of the countries' judicial systems to find an adequate solution for dealing with the high number of violations.

Notwithstanding the successes achieved by the inter-American system for the protection of human rights over the past 20 years, the proposed budgets set out below are intended to permit a systematic review of mechanisms, normative standards and effectiveness of the system. These are matters of great urgency given the rising tide of suits filed for human rights violations and the evident need to improve direct access for victims. From multiple vantage points --- of the member states themselves, of experts, and of the citizens of the region --- the system urgently needs a carefully planned process of change to make it more accessible, effective, efficient, dynamic and capable of meeting the increasingly demanding requirements of a democratic society and its protection of human rights.

It is almost universally agreed that, despite the huge progress and hemisphere-wide presence it has achieved, this is a system of protection that is, in significant respects, hobbled by its financing scheme. That scheme increasingly does not give the system the dynamism needed to provide and ensure swift justice, a basic principle of human rights recognized by the American Convention itself.

### **2. THE COURT'S CURRENT FINANCIAL POSITION: Current (2000) and Proposed (2001) Budgets**

Not being a permanent organ, the Inter-American Court of Human Rights carries out its activities at regular and special sessions held at its headquarters in San José, Costa Rica. This requires the judges to travel from their respective countries to San Jose for those meetings. In



the past five years the Court has encountered a considerable increase in the number of cases, advisory opinions, and provisional measures submitted for its consideration.

The Court's budget, however, has remained fixed over the past three years at the sum of US\$1,114,900.00, which has not enabled it adequately to cover, year after year, the ongoing increase in operating expenses associated with its case load, to say nothing of additional costs due to inflation.

This budget provides the Court with the minimum resources that it needs to function, with the resulting decline of the services that must be provided to the tribunal in order for it to perform its activities adequately. Normally, cutbacks are made and/or important activities eliminated in order to avoid closing or ending the fiscal year with a budget deficit.

For this reason, the Court has prepared a proposed budget in the amount of US\$1,521,682.27 for the year 2001 to be submitted to the upcoming OAS General Assembly. That figure represents an adjustment that would allow the Court, on a non-permanent basis, greater room for maneuver in performing its functions in the coming year. The aim of the proposed budget is to give the Court access to the additional human resources that it needs to function suitably, to service better the four sessions projected for this year, to the visits to OAS Headquarters.

### **General Information on the Court's Finances**

Following is a general description of the goals or targets which explain the functioning of the Inter-American Court of Human Rights and are reflected in its budget and in the charts below. Footnotes in the first chart also provide explanations on additional issues.

The proposed budgets prepared by the Court break down into ten goals. The first goal refers to the human resources of the Court Secretariat composed of attorneys, legal assistants, and administrative personnel. Goals three to six relate to the holding of regular sessions; the seventh goal has to do with the attendance of the President, the Vice-President and the Secretary of the Court at the General Assembly of the Organization; the eighth and ninth goals refer to meetings at the Headquarters of the Organization with various specialized committees; and the tenth goal relates to the regular business of the Secretariat of the Court.

### **Goals Three to Six: Regular Sessions of the Court**

The Organization of American States recently approved the necessary funds to hold four yearly sessions, each of which lasts, on average, two weeks. The hope is that these four yearly sessions will enable the Court efficiently to carry out the duties assigned to it by the American Convention on Human Rights.

Over the last half-decade the Court has experienced a considerable increase in the number of cases, advisory opinions, and precautionary measures that are submitted for its consider-

ation. As a result, the Court's proposed budget was adjusted in order to ensure that its human and material resources were equal to the task of carrying out the annual program of sessions designated in 1998. These remain unchanged for 2000 and for the proposed 2001 budget. The situation is different with respect to the draft budget prepared for a permanent functioning of the Court. [see Appendix 2, A Permanent Court] There, sessions would be held as needed. For this reason, the proposed budget submitted for consideration by the honorable Committee on Administrative and Budgetary Matters of the OAS also proposes holding four regular sessions in 2000 and 2001, with the aim of maintaining an optimal rate of activity given an increasingly large workload.

A basic function of these sessions is to resolve cases referred to the Court at any of the following four stages of proceedings in a case: preliminary objections, merits, damages, and enforcement of the judgment. Each of these procedural stages concerns a different set of issues and, consequently, the expenses they incur vary. For instance, whereas public hearings are an exception during preliminary objections, such hearings are essential in proceedings on merits and damages, in order to furnish the Court with the necessary evidence on which to base its judgment.

In the hearings, the Court hears the testimony offered both by the respondent state and by the Inter-American Commission on Human Rights. In practice, the testimony consumes considerable portions of each session. On average, in one day of public hearings the Court will hear testimony of between four and six witnesses. On that basis, given the number of cases pending to date, in one year of business it would take the Court far longer than 30 days of public hearings to hear only the testimony of witnesses and experts. The gravity of this situation becomes plain when one notes that in the whole of 2000 --and the same applies for 2001-- the Court will meet in session for a total of 44 days (as provided for in the budget). Of those, it has been possible to reserve only a few for public hearings.

Once the oral proceeding has concluded the Court deliberates on the merits of the case. Deliberations generally take place just after testimony is heard. In the practice of the Court, deliberations have been limited to one session and the respective judgment delivered and notified to the parties at the end of that session. It usually takes the Court four to five days to issue a judgment and requires painstaking work that involves thorough analysis of the body of evidence; study and research of specialized doctrine and case law; deliberation, drafting and discussion of a proposed judgment; and approval of that judgment.

However, the size of the Court's current caseload has made it necessary to devote fewer days to deliberations on each case. Indeed, of the total number of days that the Court will meet in session in 2000 or 2001, it is expected that more than half will be devoted to delivering judgments and advisory opinions. In other words, on average, the Court will spend less than three days on each judgment and advisory opinion. As such, the Court will issue its judgment on the merits of the cases most recently referred to it in 2000 or 2001. Deliberation on cases that reach the Court in the second half of 2000 may have to be scheduled for 2001 or 2002.

Currently, in a case brought before the Court, an average of 28 months elapses between filing the petition and delivery of judgment on the merits. Unless effective and lasting solutions are implemented, the time interval will gradually lengthen. In the past five years the Court's caseload has tripled, and the effective number of session days has only risen by a third.

As for advisory opinions, the average duration of these proceedings before the Court has been ten months. Ordinarily, requests for advisory opinions involve exceptionally delicate issues that concern the inter-American system for protection of human rights. For this reason the Court devotes several days to their study, to conduct specialized research, and to discussion, preparation and review of the matter. However, the budgetary constraints with which the Court must contend have forced it to allot only a few days to deliberations on advisory opinions.

When the Court orders provisional measures, it imposes on the State concerned the obligation not only to adopt certain measures, but also to submit periodic reports on those measures. It also imposes on the Inter-American Commission the obligation to present its observations on such reports. Consequently, this practice requires the Court to set aside one or two days in each session for the study of these periodic reports.

It should be noted that in an effort to take the greatest possible advantage of the resources that the Organization provides, during its regular sessions the Court convenes on both working and non working days, as well as on weekends.

### **Operating Expenses of the Court (Goal 10)**

Since the Court is not a permanent tribunal, its Secretariat handles a variety of ongoing tasks to provide permanent support and follow-up for the Court to issue decisions on the different matters brought before it during the short periods it is in session. Some of the activities that the Secretariat carries out to that end are as follows:

- To manage the administrative and financial affairs of the Court,
- To hire such professional services as it needs to discharge its functions,
- To provide permanent assistance to the judges of the Court ,
- To provide permanent assistance to the Court,
- To handle procedural formalities of cases referred to the Court,
- To safeguard and update the record on each case,
- To ready the necessary materials for hearings,
- To examine and index all documentary and physical evidence submitted to the Court,

- To undertake studies of legal doctrine and case law,
- To undertake investigations in connection with cases being processed by the Court,
- To prepare factual reports for proposed judgments,
- To supervise translation of documents issued by the Court,
- To select, publish and distribute documents issued by the Court,
- To respond to requests for information from other organs of the Organization,
- To respond to queries made by the public and the press on the inter-American system,
- To respond to requests for publications, and
- Insofar as it is able, to contribute to the dissemination of the system at national and international fora.

However, severe material and budgetary problems hamper the Secretariat's work in these areas. Increasingly, fluid and regular communication is needed between and among President of the Court and the other judges in order to obtain their observations and opinions on matters connected with the development of proceedings. This too is an added operating expense. In the proposed 2001 budget these costs, like the figures associated with the previous goals, have had to be increased in line with the growth and development of the system for protection of human rights in the hemisphere.

### **3. Budget for Fiscal Year 2000**

The 2000 budget was approved by the OAS General Assembly in the amount of US\$ 1,114,600. This sum is the same as that approved for the years 1997, 1998, and 1999. Accordingly, 2000 will be the fourth consecutive year that the Inter-American Court has operated with the same budget, notwithstanding the increase in operating expenses from year to year.

That budget only provides the Court with the minimum resources that it needs to function. With a growing workload, the numbers are alarming. The Secretariat's operating expenses are kept to a minimum, with the attendant decline in the services that must be provided in order for the Court to perform its activities adequately. Normally cutbacks have to be made or important activities eliminated so as to avoid closing the year with a budget deficit.

As of March 23, 2000, the Court received notice from the OAS Assistant Secretary for Management in which he explained that due to the difficult financial situation of the OAS, all areas must take measures to reduce by 10% their year 2000 budget executions. For the Court, this represents a reduction in the order of US\$150,000.00 for what remains of the year. This will force the Court to rethink and revise its work strategy for the rest of the year. Above all, however, it will impact negatively on at least two sessions scheduled for this period.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

Chart follows.

GOAL	Year 2000	YEARLY AMOUNT
GOAL 1	Human resources composed of lawyers, legal assistants, and administrative personnel	668,813.51
GOAL 2	First Session of the Court at its HQ	48,668.65
GOAL 3	Second Session of the Court at its HQ	41,810.00
GOAL 4	Third Session of the Court at its HQ	47,710.00
GOAL 5	Fourth Session of the Court at its HQ	47,710.00
GOAL 6 <sup>3</sup>	Participation in the OAS General Assembly	10,493.00
GOAL 7 <sup>4</sup>	Meeting in Washington: CAJP, CAAP, Missions and OAS Departments	9,500.00
GOAL 8 <sup>5</sup>	Meeting in Washington with the Inter-American Commission on Human Rights	30,750.00
GOAL 9	Course of the Juridical Committee in Rio de Janeiro	4,500.00
GOAL 10	Operating costs of the Secretariat	204,644.84
	<b>YEARLY TOTAL</b>	<b>1,114,600.00</b>

3 The attendance of the President, Vice-President and Secretary of the Court at the General Assembly of the Organization is an obligation that derives from the Charter of the OAS and from the American Convention on Human Rights, Article 65. It provides, "To each regular session of the General Assembly of the Organization of American States the Court shall submit, for the Assembly's consideration, a report on its work during the previous year. It shall specify, in particular, the cases in which a state has not complied with its judgments, making any pertinent recommendations."

4 In recent years, the representatives of the Court have traveled to Washington, D.C. to meet their obligation to present the annual report on the activities of the Court to the honorable Committee on Juridical and Political Matters. In order to rationalize the resources that the Organization provides, the representatives of the Court take advantage of this visit to present and justify the Court's yearly budget. This visit to the Headquarters of the Organization is of paramount importance for an organ such as the Inter-American Court of Court, which is geographically removed from the Headquarters. It involves the preparation of an agenda of some twenty-five official visits by President, Vice-President, and Secretary of the Court to the Committee on Administrative and Budgetary Matters, and to different ambassadors and permanent representatives.

5 In compliance with General Assembly resolution AG/Res. 1041 (XX-0/90), the Inter-American Commission and Court are required to meet to establish "coordination mechanisms so that both organs may, within their respective spheres of competence, cooperate between themselves to better protect human

#### 4. Proposed Budget for Fiscal Year 2001

The Court has submitted for approval by the OAS General Assembly a proposed operating budget for fiscal year 2001 that marks an increase of 37% over the budget for fiscal year 2000. This proposed budget amounts to US\$1,521,682.27. The aim of this budget is to give the Court access to the additional human resources that it needs to function suitably, and to better address the four sessions projected for this year, the visits to OAS Headquarters, and the operations of the Secretariat overall.

GOAL	Year 2001	YEARLY AMOUNT
GOAL 1	Human resources composed of lawyers, legal assistants, and administrative personnel	820,774.87
GOAL 2	First Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 3	Second Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 4	Third Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 5	Fourth Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 6	Participation in the OAS General Assembly	14,200.00
GOAL 7	Meeting in Washington: CAJP, CAAP, Missions and OAS Departments	17,990.00
GOAL 8	Meeting in Washington with the Inter-American Commission on Human Rights	40,296.00
GOAL 9	Course of the Juridical Committee in Rio de Janeiro	4,930.00
GOAL 10	Operating costs of the Secretariat	353,692.00
	<b>YEARLY TOTAL</b>	<b>1,521,682.87</b>

rights." To date, the Court has promoted and agreed to hold a series of meetings jointly with the Commission, including those held in San José in 1990, in Nassau in 1992, in Belém do Pará in 1994, in Miami in 1994, and in Washington, D.C. in 1995 and 1996. In September 1997 the seventh such meeting took place at the Seat of the Court in San José, Costa Rica; in 1998 the eighth meeting was held at the Headquarters of the Commission in Washington, D.C., and the last meeting, in 1999, was held at the seat of the Court. Both the proposed 2001 budget and the approved 2000 budget provide for at least one plenary meeting to be held, either in Washington, D.C., or at some other designated venue, as well as a meeting of the organs' executive officers at the General Assembly of the OAS.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

As of this writing, the plan of the member states is to reduce the Court's proposed 2001 budget by \$400,000. As discussed in the previous section, the member states have moved this shortfall to the category of activities for which no source of funding has yet been secured.

### 5. Projecting Upcoming Financial Needs of the Court

Below we set out a projected financial scenario for the Court in the medium term. The numbers are provided by the Court itself, and represent an estimate of where the system will be and what its financial needs will be in the future. Note that the figures do not incorporate new ideas or work methodologies. For illustrative purposes, we deal with a few such ideas and their related costs in Appendix 2.

The Court has prepared a projected budget shown in the chart below for financing its operations in the medium term. It tries to balance and take account of the financial and budgetary constraints currently affecting the Organization of American States, and a reasonable estimate of the costs of its future work.

GOAL	ITEMIZED COURT PROJECTION	YEARLY AMOUNT
GOAL 1	Human resources: lawyers, legal assistants and admin. Personnel	1,098,992.03
GOAL 2	First Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 3	Second Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 4	Third Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 5	Fourth Session of the Court at its HQ	67,450.00
GOAL 6	Participation in the OAS General Assembly	14,200.00
GOAL 7	Meeting in Washington: CAJP, CAAP, Missions and OAS Departments	17,990.00
GOAL 8	Meeting in Washington with the IACHR	40,296.00
GOAL 9	Course of the Juridical Committee in Rio de Janeiro	4,930.00
GOAL 10	Operating costs of the Secretariat	504,866.96
	<b>YEARLY TOTAL</b>	<b>1,951,074.99</b>

---

## **B. Inter-American on Human Rights Commission: Finances and Projections**

### **1. GENERAL CONSIDERATIONS**

Analyzing the evolution of the inter-American system of human rights, particularly the Commission, from the perspective of the human and financial resources at its disposal is revealing. We see the changing level of support that the states have contributed to the Commission's budget. We also see the degree to which that budget has varied with time, and the fundamental correlation between that input and the system's output -- in its investigations, hearings, on-site visits, friendly settlements, cases referred to the Court, reports, etc..

During its early years the Commission did not have its own secretariat. The work of the Commissioners depended on the logistical and administrative support provided by one or two lawyers at the Department of Legal Affairs --as it was then called-- of the General Secretariat of the OAS. This lack of structure reflected the vision with which IACHR was created in 1959. In 1967 the Commission became independent from the Department of Legal Affairs and was furnished with an Executive Secretariat, made up of four professionals, and a budget of \$85,000.

Throughout the 1970s, an era of widespread human rights violations and proliferation of dictatorships in Latin America, the IACHR progressively cemented a well-earned prestige for its defense of human rights.

The 1980s, years of transition toward democracy in the hemisphere, were also a period of transition for the Commission. As systematic violations and dictatorships began to recede, new and varied demands were placed on the Commission.

As relations between the states strengthened, so did the Commissions' with a broad network of non-governmental human rights organizations.

The Commission and its Secretariat strove to tailor its personnel and resources to a demanding new reality. In 1990 the Commission had a staff of eight lawyers, five administrative employees and a librarian hired on a performance contract. Today, the Commission's staff consists of 16 lawyers and nine administrative employees. Added to this number are two lawyers and a librarian on performance contracts and six secretaries hired through temporary employment agencies.

Throughout the 1990s the Commission's workload has grown steadily, the nature and variety of demands on it has multiplied, and the Commission has embarked on a series of efforts and initiatives to meet them.

To illustrate, let us look at some representative work of the IACHR: in the 1980s, only four contentious cases were referred to the Inter-American Court, while in the 1990s that num-



ber rose to 31. In the 1980s only one request for provisional measures was filed with the Court, compared to 20 requests the following decade. Since its creation the IACHR has also conducted 77 on-site visits<sup>6</sup>.

There has been an even greater workload increase in the case system. The Commission is receiving more petitions, processing more cases, and producing more reports. There are currently over 1,000 cases being processed by the Commission. Reports on cases have grown in breadth, detail and depth of legal analysis.

The most visible manifestation of this increase in the individual case system is the size of the annual report that the IACHR presents to the General Assembly of the OAS. The 1989-1990 Report, of which 80% was devoted to reports on individual cases, was 195 pages long. The 1998 annual report, on the other hand, consisting of three volumes, had a total of 1,600 pages. Added to this mountain of work are the reports on different countries and on special studies.

The surge in the Commission's workload and output has been particularly apparent in the last four years. This is true of all areas, as reflected in the increasing number of reports published on individual cases and countries. The number of on-site visits has doubled. So too the number of cases referred to and heard by the Inter-American Court. There has been an increase in the number of precautionary measures granted by the Commission, and of requests for provisional measures filed with and examined by the Court. Friendly settlement procedures and activities have increased as well.

Without contributions from specific funds it would have been impossible for the Commission to carry out certain activities, such as on-site visits, hearings before the Inter-American Court of Human Rights, publication of a number of reports, publication of the annual report, and maintenance of the library. In this category are also a number of special projects, including "Strengthening the Inter-American System for the Defense of the Human Rights of Indigenous Communities, Ethnic Minorities and Other Vulnerable Groups Affected by Conflicts in Central America" and the work of the "Special Rapporteur on the Migrant Workers."

## **Budget History**

As to its financial history, the IACHR's 1990 budget was \$1,305,500. Slight increases came in the years that followed. But 1996 saw a substantial hike, with the Commission receiving twice its 1990 budget allocation. This significant gain provided the Commission with the basic means to tackle, in some measure at least, the challenges of the 1990s. The budget for 2000 is \$3,133,700.

---

<sup>6</sup> Of the 77 on-site visits the IACHR has carried out to date, 42 were to different OAS member states in the last decade.

The Commission's budget has risen very little since the considerable boost it received in 1996. Of the approximately US\$3 million that the Commission is currently allocated, \$2,091,300 is spent on the salaries of its employees.

The amount left over for operating expenses is barely enough to pay for the meetings of the Commission. The IACHR annually holds two regular sessions lasting three weeks each, in addition to one or two special sessions. Each two-week session costs nearly US\$150,000.00. The main area of expense at these meetings are interpretation and translation costs in two languages; at recent sessions of the Commission these expenses have amounted to \$75,000.

Due to its budgetary constraints, the Commission has had to make adjustments as the year's workload plays out. However, in order to make up some financial shortfalls the IACHR has requested and obtained specific funds both from member states of the OAS and from friendly countries in Europe. In recent years the Commission has secured an additional \$2,767,000 in this way. Unfortunately, owing to the nature of these contributions, the IACHR is unable to plan its activities on the expectation of these funds. It is impossible at the start of the year to predict either the contributions that will be available, the amount of those contributions, or the date on which the monies will become available.

In order to cover all its needs the Commission will continue to seek additional resources from cooperation agencies and friendly countries that wish to contribute to special projects and specific funds. The primary responsibility, however, rests with the member states, which created the system and must provide it with the resources it needs to perform its task of defending and promoting human rights throughout the hemisphere.

The proposed budgets prepared by the Commission have been developed by grouping together the most important activities it carries out. Following is a general description of the goals entailed in the activities of the Commission as reflected in its budget and in the charts below.

## **GOAL N° 1**

This goal relates to the human resources of the Secretariat, composed of an Executive Secretary, two Assistant Executive Secretaries, and professional, technical, and administrative personnel. This goal also includes an amount for hiring support personnel, be they lawyers or secretaries, since the IACHR budget line does not permit the hiring of permanent staff.

Also, this goal includes the Secretariat's operating expenses, such as processing cases for friendly settlement; hearing of cases before the Inter-American Court of Human Rights; pro-

motion trips; attendance at conferences and seminars; office lease<sup>7</sup>; procurement of office equipment and supplies; and postal, telephone and photocopying expenses, etc.<sup>8</sup>

## GOAL N° 2

Not being a permanent organ, the Inter-American Commission on Human Rights carries out its activities at regular and special sessions held at its headquarters in Washington, D.C., to which the members must travel from their respective countries of residence. The sessions of the Commission are normally held at headquarters. However, by vote of an absolute majority of its members, the Commission may meet at an alternative venue, with the consent or at the invitation of a member state of the Organization.

At its regular and special sessions the Commission devotes itself to the examination and adoption of reports on admissibility, friendly settlement, and merits of individual cases presented in accordance with its regulations, and to consideration of their referral to the Inter-American Court of Human Rights. The Commission also analyzes and adopts reports on the general situation of human rights in OAS member states. It also sets aside several days in its sessions to hold hearings on individual cases, for following up on cases, and for reviewing the general situation of human rights in the member states.

The Commission members also discuss other matters connected with its mandate to promote respect for and defense of human rights in the hemisphere, such as on-site visits, the activities of special rapporteurs, and adoption and presentation to the General Assembly of the OAS of the annual report.

## GOAL N° 3

The IACHR carries out on-site observations based on the criteria of need and advisability. In grave and urgent cases the IACHR can conduct an on-site investigation with the prior consent of the state alleged to be responsible for a violation of human rights.<sup>9</sup>

---

7 [Secretariat Note: For OAS programs, the Secretariat includes the costs for office space occupied, since this is part of a program's cost. Though it is covered from a central account, it is useful to include it to reflect better the costs of a program.]

8 The IACHR is required to present its budget in accordance with a figure indicated by the Department of Administrative Analysis, Planning and Support Services. The appropriation is not sufficient to cover all the Commission's activities, which makes it necessary to resort to specific funds. These donations are limited to specific activities of the IACHR stipulated by the donor.

9 On-site visits have been financed with contributions from specific funds. The resources provided by the regular fund are not sufficient to cover the cost of this important activity of the Commission.

**GOAL N° 4**

This goal relates to writing and publication of documents on IACHR activities in exercise of its authority to defend and promote respect for human rights. To give an idea of the voluminous nature of this activity by the Commission, we mention the following publications:

- a) Inter-American Yearbook on Human Rights, an annual publication that is sent to law schools at universities in Latin America and the Caribbean;
- b) Annual Report of the IACHR, which is presented to the General Assembly of the OAS. The 1998-1999 Annual Report was 1,600 pages long;
- c) Situation of Human Rights in different countries. The following such reports have been published in the last decade:<sup>10</sup>
  - Report on the Situation of Human Rights in Haiti,
  - Report on the Situation of Human Rights in Peru,
  - Report on the Situation of Human Rights in Guatemala,
  - Report on the Situation of Human Rights in Colombia,
  - Report on the Situation of Human Rights in El Salvador,
  - Report on the Situation of Human Rights in Ecuador,
  - Report on the Situation of Human Rights in Brazil,
  - Report on the Situation of Human Rights in Mexico
  - Report on the Situation of Human Rights in the Dominican Republic.
  - Report on the Situation of the Human Rights of Asylum Seekers in the Framework of the Canadian System for Determining Refugee Status.
  - Report on the Situation of Human Rights in Amayapampa, Llallagua and Capasirca, Northern Potosí, Bolivia.

The following reports are currently under preparation:

- Report on the Situation of Human Rights in Peru
  - Report on the Situation of Human Rights in Paraguay
  - Report on the Situation of Human Rights in Guatemala
- d) Other publications of the IACHR include the following:
    - Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System,
    - How to present a petition in the Inter-American System
    - Signatures and current status of ratification of the different instruments on human rights,
    - Report on the Status of Women in the Americas.
    - Report on the Situation of the Human Rights of Indigenous Peoples in the Americas

<sup>10</sup> The IACHR has published reports in different years on a given country.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

**GOAL N° 5** includes maintenance, on a minimal budget, of the Commission's Documents Center. The operating expenses of the Secretariat are kept low. Normally important activities often must be eliminated due to lack of resources.

## 2. Budget for Fiscal Year 2000

The budget itemized below provides the Commission with the minimum resources that it needs to function. The operating expenses of the Secretariat are kept to a minimum. Normally important activities have to be eliminated due to lack of resources.

GOAL	BREAKDOWN FOR 2000	AMOUNT
GOAL 1	Human resources <sup>11</sup>	\$2,091,300.00
	Performance contracts with lawyers, secretaries and one librarian	280,000.00
	Operating costs of the Secretariat <sup>12</sup>	233,000.00
	Office lease and maintenance	146,200.00 <sup>13</sup>
GOAL 2	Two regular meetings, each lasting three weeks, and a special meeting lasting one week	375,000.00
GOAL 3	On-site visits to member states <sup>14</sup>	0.00
GOAL 4	Writing and publication of documents <sup>15</sup>	0.00
GOAL 5	Maintenance of a document center and a specialized library (purchase of publications and subscriptions)	8,200.00
<b>APPROPRIATION FROM THE OAS REGULAR FUND</b>		<b>\$3,133,700.00</b>
<b>SPECIFIC FUNDS</b>		<b>389,000.00<sup>16</sup></b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$3,522,700.00</b>

11 Currently the human resources of the Secretariat of the Commission are composed of one Executive Secretary, two Assistant Executive Secretaries, 13 lawyers, one administrative employee and eight secretaries.

12 Travel to the General Assembly of the OAS; Court Hearings; Attendance at meetings and seminars; promotion trips; office equipment purchases; and telephone, photocopying, internet, mail, etc.

13 The 2000 budget approved for the IACHR was \$2,987.5m. However, at the beginning of this year it was allocated the sum of \$146,200.00 for financing office lease expenses.

14 In view of the insufficiency of the budget from the regular fund, it is hoped the shortfall needed to carry out on-site visits will be made up with support contributions from specific funds. The Commission carries out an average of three on-site visits a year at an estimated cost of \$40,000 each.

15. The figure 0.00 is shown for this goal because it is normally financed with specific funds, since the total appropriation from the regular fund does not enable the IACHR to meet the cost of this important activity.

16. This total is an average of specific funds received in the past four years. The actual sum varies greatly from year to year, and is disbursed at different times in the year. As a result, sometimes donations are not spent in one budget year.

On March 23, 2000, Mr. James R. Harding, Secretary for Administration sent out a memorandum informing that, due to the current financial difficulties of the OAS, all areas should adopt the necessary measures to reduce budget execution by 10% in 2000.

### 3. Proposed Budget for Fiscal Year 2001

The Commission has submitted for approval by the OAS General Assembly a proposed operating budget for fiscal year 2001 in the amount of US\$3,114.7, which is the figure assigned to the IACHR. However, as explained above, this figure does not reflect the reality of the Commission's current requirements.

GOAL	BREAKDOWN FOR 2001	AMOUNT
GOAL 1	Human resources	\$2,091,300.00
	Performance contracts with lawyers and secretaries	280,900.00
	Operating costs of the Secretariat	238,000.00
	Office lease and maintenance	121,000.00
GOAL 2	Two regular meetings, each lasting three weeks, and a special meeting lasting one week	375,000.00
GOAL 3	On-site visits to member states	0.00 <sup>17</sup>
GOAL 4	Writing and publication of documents	0.00 <sup>18</sup>
GOAL 5	Maintenance of a documents center and a specialized library (purchase of publications and subscriptions)	8,500.00
<b>REGULAR FUND OF THE OAS</b>		\$3,114,700.00
<b>SPECIFIC FUNDS</b>		389,000.00 <sup>19</sup>
<b>TOTAL</b>		\$3,503,700.00

### 4. Projections of the Commission for the medium term

The projected figures shown in the table below are an estimate of the growth the Commission will experience given the increase in its workload: in number of petitions alleging human rights violations, in cases brought before the Court, in on-site visits, in activities of promotion of human rights, etc.

17 Estimate for one on-site visit lasting three days.

18 The figure 0.00 is shown for this goal because it is normally financed with specific funds, since the total appropriation from the regular fund does not enable the IACHR to meet the cost of this important activity.

19 This is an estimate based on the average contributions received in the past four years.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

A comparison of the growth rates of 1985/1995 with that of 1995/2005 indicates that the projected figures are conservative.

GOAL	BREAKDOWN FOR 2005	AMOUNT
GOAL 1	Human resources <sup>20</sup>	\$2,700,000.00
	Operating costs of the Secretariat	390,000.00
	Performance contracts for one librarian and administrative support	150,000.00
	Office lease	165,000.00
GOAL 2	Three regular meetings, each lasting three weeks, and two special meetings lasting one week each (two languages)	700,000.00
GOAL 3	Processing of friendly settlements, promotion trips, and attendance at conferences and seminars	100,000.00
GOAL 4	Processing of cases before the Court	215,000.00
GOAL 5	On-site observation visits to member states (four visits are anticipated)	275,000.00
GOAL 6	Writing and publication of documents	300,000.00
GOAL 7	Maintenance of a document center and a specialized library (purchase of publications and subscriptions)	15,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,010,000.00</b>

### III. Analysis and Implications

At the outset of this paper, we have emphasized that the OAS is operating within severe constraints and limitations. The fairly conservative projections for the Court and Commission set out in the second part of this study give us an indication of the scale of necessary efforts to meet future human rights budgetary demands. The mandate from the Ad Hoc Working Group asks that we set out implications for the organization of finding those monies within the OAS's regular budget.

Before entering that discussion, it is useful to place a few related ideas on the table.

**Quota Increases:** Quota increases have been the object of some discussion recently within the OAS. Making no judgement regarding where those discussions are headed, one figure on the table is a 3% increase. However likely or unlikely, a general quota increase of 3% still only yields roughly \$2m --- for the whole organization. Earmarking a large portion of any

<sup>20</sup> For 2005 we estimate hiring five additional lawyers and two secretaries.

quota increase for human rights is a possibility, but it is achievable only with a clear and specific consent of the member states in a General Assembly resolution and or its budget resolution.

It must be mentioned, as well, that currently a group of member states are in arrears to the organization for a total amount of roughly \$45m. The OAS General Standards dictates that arrears will be deposited to the Working Capital Sub-fund and can be used for short term cash needs in expectation of quota increases. The Permanent Council can approve an extraordinary appropriation from that fund for one-time activities. Realistically, it is unlikely that a plan to direct arrears monies to any specific area would be successful.

**External Funding:** Irrespective of our capacity to meet these finance goals within the regular budget, the human rights organs could and should look to external funding to bolster their operations. This is the practice at the moment for many areas within the OAS, as the reader can appreciate from the chart in APPENDIX 1 of this report. It must be stated, however, that for the human rights area in particular the arguments set out earlier relating to specific funding still apply. A basic operating premise from which our human rights mechanism derives much of its power and legitimacy, is that the member states themselves fund it. There is even some tension that derives from the fact that some countries within the system donate more funds to the system than others. The farther we move away from the notion that the entire membership funds their own human rights enforcement mechanism, the more distortions and tension are likely to obtain.

Still, there are operations and programs within the OAS that are more straightforwardly fundable with external monies. That is, the difficulties of external funding are fairly unique to the highly political nature of the human rights system. The external funding idea still has merit, then, in the sense that it can be used to create headroom elsewhere within the regular budget, which funds, in turn, might be dedicated to specific areas such as human rights.

### **Finding monies from within the regular budget: Playing the zero Sum Game**

Even using a fairly generous set of assumptions relating to quotas, arrears, and inflation it is inescapable that the OAS regular budget is tapped out. The nominal budget has decreased almost 11% from \$84.5m to \$80m (minus \$4m for which we do not yet have financing) since roughly 1995. In real terms much more. Finding the required monies from within the regular budget can no longer be an exercise in finding and eliminating inefficiencies. That process has been in place for a considerable time and is unlikely to yield significant further benefits.

Nevertheless, it has been the objective of the General Secretariat to move monies into areas on the cutting edge of the new hemispheric agenda. Since human rights already sits atop the priority list, even with a shrinking nominal budget of the organization, the inter-American



human rights system has not experienced the punishing budget shortfalls of other areas in the OAS. Still, the gains of human rights, of course, have meant the loss to some other area within the Organization.

Herein lies the crux of the discussion of finding funds within the regular budget.

The Secretary General, by statute, can move monies within the budget by a cumulative 5% each year, as long as it does not materially affect any approved program. If the change does, he must seek Permanent Council approval. Certain areas, including human rights, have to some extent benefited from this. And we might do more here. The member states might direct that the Secretariat, to the extent money is freed up in the budget --- move it into priority areas, perhaps with the certification of the inspector general to make the process as transparent and automatic as possible. But just as clear is that a diminishing results curve has set in for this device; it is difficult to envision that it will achieve what is sought here.

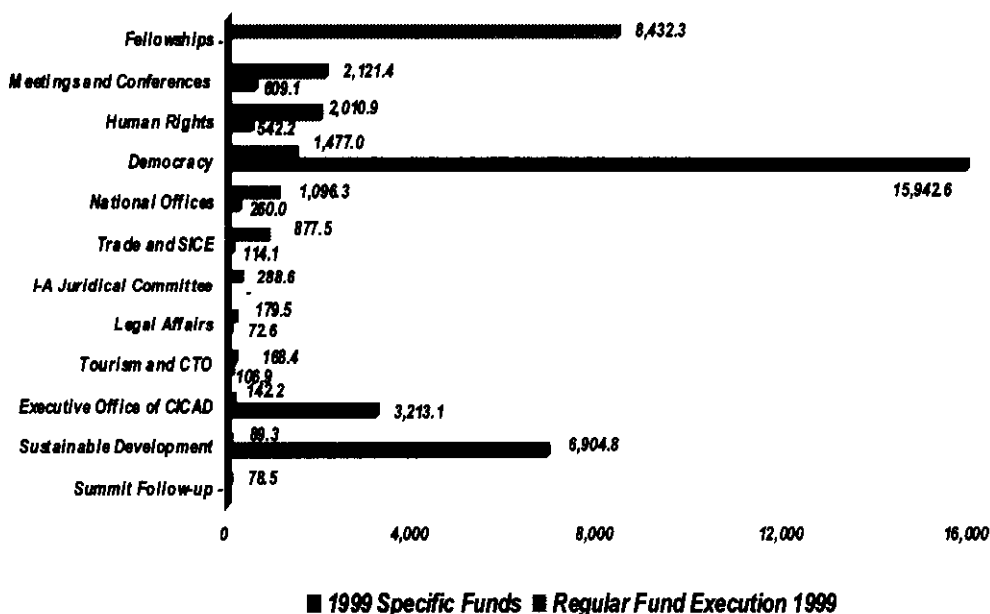
What is required is a more comprehensive and rationalized sorting and recasting of budget priorities. In the recent past, the member states have directed the Secretary General to attempt this, for approval of the member states. And time and again that process has not yielded sufficient consensus to come to a useful conclusion. It has become clear that the instruction alone by the Ministers to the Secretariat will not be sufficient to achieve the desired result. Even formal mandates within a resolution to grant budget priority to a specific area, such as human rights, have not generated results.

Recasting the priorities of the regular budget is not an impossibility. But it can be achieved only within a fairly strict process directed and agreed upon by the member states themselves. This could be accomplished at an OAS General Assembly, or a special General Assembly called for the purpose. The critical and indispensable product must be a decision, memorialized, for example in a resolution, which sets out a clear roadmap reorienting budget priorities of the OAS in a zero sum game. That is to say, it must articulate where the money would go and where it would come from.

The inter-American human rights system is rightfully among the principal priority of the organization's work. It is perhaps also true there is a great chasm between the articulated priority of the human rights system in our hemispheric agenda, and the relative paucity of funds we have been able to direct to that work. As such, we can and should find ways to meet the system's budgetary needs to retain its effectiveness and its protagonism in our hemispheric architecture. We can and should, as well, look for creative ways to meet those budget requirements. To the extent we look to the regular budget of the OAS to meet those needs, it is indispensable that the member states themselves set down specific markers regarding budget priorities, which is then memorialized as a specific legislative product. The General Secretariat stands ready to assist in any way it can, and to implement the directives of the member states.

### APPENDIX I. Priority Areas: 1999 Regular and Specific Funds

#### Non-Personnel Execution (US\$ thousands)



### Appendix II: Additional Ideas and their Cost

In order to provide a fairly clean set of figures for the analysis of the Ministers and their representatives, the projected scenarios outlined in this study intentionally do not contemplate major new initiatives. However, we believe it is important to have an educated sense of what additional costs might be associated with some of the ideas already on the discussion table.

The ideas and their costs should not only be understood not merely as additional costs, however. The Secretariat believes that as part of our streamlining and constant work toward finding new efficiencies, some fairly bold solutions might be found in new ways to do business ---even though these may have an additional up-front cost.

The figures are, of course, estimates. But we believe that the data may be useful to the member states.

## I. A Permanent Court

The proposed budget in the amount of US\$ 6,061,244.57 would enable the Inter-American Court of Human Rights to function, albeit modestly, on a permanent basis with seven resident judges at the Seat of the Court, and discharge its duties under the American Convention on Human Rights. It includes the salaries of the judges, the Secretariat, the legal department, the library and necessary administrative personnel. However, this budget does not envisage any substantial expansions or improvements to the building where the Seat of the Court is currently housed. The budget estimates: arrangements to be made to ready the Court for 28 public hearings a year, to present the Annual Report of the Court to the Committee on Juridical and Political Affairs of the Permanent Council, and all Court operating expenses for a projected increased workload.

The budget takes into consideration the permanent presence at the Seat of the Court of the seven incumbent judges, while leaving largely unchanged the other services that the Secretariat currently provides in the normal course of Court business. Taking into account the number of cases for settlement at present in the system, this yearly budget could sustain the Court's operations at least in the medium term (five years). Any increase in case load would, of course, make it necessary to revise the projection. This projection assumes that the Court will remain in the same building where it is currently housed.

<b>BREAKDOWN Permanent Court</b>	<b>YEARLY AMOUNT</b>
Human resources: lawyers, legal assistants, and administrative personnel	3,103,159.07
Court sessions in first quarter	472,150.00
Court sessions in second quarter	475,150.00
Court sessions in third quarter	472,150.00
Court sessions in fourth quarter	472,150.00
Participation in the OAS General Assembly	14,200.00
Meeting in Washington: CAJP, CAAP, Missions and OAS Departments	
Meeting in Washington with the Inter-American Commission on Human Rights	
Course of the Juridical Committee in Rio de Janeiro	4,930.00
Operating costs of the Secretariat	1,047,355.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,061,244.57</b>

## **II. PROPOSAL TO REINFORCE THE INVESTIGATIVE CAPABILITIES OF THE INTERAMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM**

In the ongoing debate on measures to strengthen the Interamerican human rights system, there has been some consensus surrounding the need to (1) strengthen the system's investigative capabilities; (2) reduce the duplication of tasks between the Commission and the Court (3) create stronger links with national authorities; (4) provide citizens with greater access to the system; (5) increase the case load the system can handle; (6) decrease the time it takes to investigate and try the cases; (7) increase the number of cases sent to the Court; and (8) adopt uniform and transparent procedures.

In the short term and at a very low cost relative to the potential benefits, the system should take measures to protect and utilize as efficiently as possible the limited resources available to it. The Secretary General has reason to believe that with only minor changes to the applicable regulations and without need to modify the American Convention, it might be possible to substantially contribute to the achievement of these goals. We propose to (1) strengthen the investigative capabilities of the system through the creation, both within the Commission and the Court, of units specialized in investigating and preparing evidence ("investigative units"); and (2) adopt mechanisms that harmonize the practices of both institutions with respect to the collection of evidence.

None of the measures proposed in this document limit in any way the authority or jurisdiction of the Commission or the Court. Their only purpose is to allow the system to use its limited resources in the most efficient way, without having to make great investments or complicated regulatory adjustments.

We begin with a general analysis of the contribution that strengthening the investigative capabilities and harmonizing the evidentiary procedures of the Commission and the Court would make to solve the problems set out in the first paragraph. Then, we move to a presentation of the elements, structure and costs such a measure might take in our system.

### **Strengthening the investigative capabilities of the system**

Today, the organs charged with uncovering the facts which give rise to a complaint within our system have a set of responsibilities that preclude them from focusing exclusively on evidentiary matters. Investigative units with a structure and personnel to deal exclusively with such matters could fill this enormous vacuum.

The investigative units would (1) reassign resources exclusively to perform investigations, and (2) incorporate the principle that specialized organs are generally more competent, efficient, and qualified to fulfill a particular mission.

In the field of criminal law, the principle of specialization has been successfully employed by the accusatory system. This system clearly separates the authorities that investi-

gate and accuse from those that make judicial decisions in a trial. This has developed into the function of a prosecutor, specialized in investigating and accusing. The beneficial effects have been considerable, and are hard to achieve within an inquisitorial system --- which as we know --- imposes on the judges the burdens of directing the trial, deciding the merits of the case, investigating, and preparing the case for trial. As a response, the accusatory system has been increasingly held up as the dominant model to strengthen the investigative capabilities of a judicial system. The Inter American system could derive similar benefits.

The existence of investigative units would not in any way imply that the members of the Commission or the members of the Court would be left out of the investigation. The members of the Commission retain the authority at all times to order the collection of any evidence it considers necessary. But contrary to what occurs today, they would not have to spend a substantial part of their time in the collection of such evidence. In this way, they could, if they choose, focus on the primary task of preparing their decisions. Likewise, the Court. While the investigative unit works with the Commissions' investigative unit in the appropriate collection of evidence, the Court could concentrate more of its time in preparing its decisions.

### **Reduce work duplication**

Today, the Court generally duplicates most of the evidentiary proceedings undertaken by the Commission. The proposed structure would contribute to substantially reduce such duplication. It would (1) adopt evidentiary procedures acceptable to the Court, which would be used from the beginning of the investigative proceedings before the Commission; and, (2) seek the active involvement of the Court, through its similar investigative unit, in the evidentiary proceedings before the Commission's investigative unit.

### **Increase the number of cases processed by the system**

The purpose of creating the proposed investigative units is to use more efficiently the limited resources of the system, not to increase the number of cases before it. But it is reasonable to think that strengthening its investigative capabilities and lightening the load on the members of the Commission and the Court with respect to evidentiary proceedings would result in an increase in the number of cases the system can process before it.<sup>21</sup>

---

21 We also believe that greater clarity with respect to the juridical situation of the parties before the Court could result in a more efficient use of the system's resources.

We have consistently stated that once the Commission decides to send a case to the Court, the Commission should not assume the role of defense for the petitioner, but should instead protect its impartiality by assuming the role of *ministerio público*. In practice, even if the representatives of the victim participate as advisors to the Commission in controversial matters before the Court, such representatives do not have the autonomy that would be required to defend their own specific interests --- interests which will not always coincide with those of the Commission. Moreover, the victims representatives may not address procedural matters or participate actively in evidentiary proceedings ordered by the Court, unless they do

### **Establish stronger links with national authorities**

One of the clear advantages of establishing stronger links with national authorities is that significant economic and logistical benefits could be obtained in the short run simply by leaning on them --- that is, engaging them to assist with specific field support in cases. Of course, such support would remain at the discretion of the Commission and the Court.

Because they are technical and specialized organs, the investigative units could turn into important tools to advance the important task of establishing with the national authorities links which are more agile, solid, and productive.

We understand the difficulty of establishing such links; often cases themselves inherently contain the seeds of tension between domestic judicial authorities and those of the Inter-American system. However, we are convinced that here and now potential benefits are greater than the potential problems. Democracy has given the Inter-American system and domestic authorities enhanced possibilities to operate as allies. It has also created favorable conditions for the creation and strengthening of institutions, like the ombudsman and the prosecutor, which could eventually provide important support to the system.

Naturally, the Inter-American system would not lose the right to decide whether it is convenient to receive support from a national system. If it finds that it is convenient to do so, the system would specify the institutions and judges from which support would be received and the terms under which such support would be acceptable.

The possible benefits of such cooperation are significant. For example, the system would benefit from the active support of national institutions, particularly those in charge of administering justice and protecting human rights. It would also create favorable conditions for national systems to cooperate and learn more about the Inter-American system for the protection of Human Rights system.

### **Elements and structure**

The elements and the structure of the proposed investigative units are simple, do not require great regulatory or financial efforts, are adjustable depending on case-load, contribute to harmonize the evidentiary practices of the Commission and the Court, and can be imple-

---

so through the Commission. Finally, in the words of Judge Cançado Trindade, the petitioner's lack of autonomy in proceedings before the Court creates "...a lack of equilibrium between the parties, in favor of the defendant state...".

We believe that giving victims a broader right to participate in proceedings before the Court would lead to specifying with greater clarity and efficiency the legal matters which should be the subject of the judges' decision. This could contribute to create, in time, a more synthetic, transparent, and equitable process.

Informe sobre el Financiamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(Secretaría de la Corte, abril de 2001)

mented with available resources. Since the point of this effort is to use the resources of the system in the most efficient way possible, it is assumed that each of the investigative units will be created using available resources to the extent possible.

The changes consist specifically in creating both within the framework of the Commission and the Court units specialized in investigating and preparing cases. These units would use uniform procedures to collect evidence and would work closely to eliminate the need to repeat before the Court the steps taken to collect evidence during the proceedings before the Commission. These practices would not in any way limit or preclude that authority of the Court under its regulations, even if such evidence had already been collected before the Commission. But the proposed changes are aimed precisely at reducing the need to collect the same evidence twice.

*Investigative unit of Court:* This unit would be based in San José, Costa Rica and be subject to the regulations of the Court and authority of its judges. It would perform multiple functions. It would investigate and collect evidence. It would specify the protocols, procedures, and practices that should be followed by a similar unit within the Commission, ensuring that the evidence would be acceptable and usable before the Court. It would provide counsel to the investigative unit before the Commission with respect to such protocols, procedures, and practices. It would collect the evidence ordered by the Court. It would recommend mechanisms to strengthen coordination with the investigative unit before the Commission. In addition, the unit would ensure that the investigative unit before the Commission adheres to such protocols, procedures, and practices. The investigative unit before the Commission would be accountable for adherence to these practices and standards.

As a first step towards the formation of the unit, we propose the creation of the post of director of the investigative unit before the Court. The costs of the position are described at the end of this document. He or she should have the authority to select the unit's personnel, ensuring that such officers meet the requirements with respect to education, training, professionalism, and competence. These functions assigned to the director of the investigative unit would be performed under the authority of the Court, and when the Court is not in session, under that of its presidency.

At the outset, the directors of the units should select the members of their teams from among the personnel of the Commission or the Court. This is likely to mean initial dislocation in the staff. But its advantages would soon become evident, and could eventually result in significant economies for the system as a whole. In forming his team, the director should pay special attention to the professional qualities of those selected. Only professionals of high intellectual caliber and with the appropriate training, motivation, experience, and track record should be selected.

*Investigative unit of the Commission:* As with the Court, the first step we propose is the creation of the post of director of the investigative unit before the Commission. Costs of the

position are listed at the end of this document. As we develop uniform criteria to govern the collection of evidence, the directors of both units would have the essential and critical task of ensuring that the evidence collected, particularly before the Commission, is governed by demanding uniform criteria. This should minimize objections to the validity of that same evidence should it be required in a case before the Court. Throughout the proceedings, the director will remain subject to the authority of the Commission, and when the Commission is not in session, to its presidency.

As we suggested regarding the Court, and based on the same arguments, we respectfully submit that the Commission should fill the ranks of its investigative team through its existing professional staff, with the same potential system-wide benefits.

Under the proposed structure, once the Commission opens a case, it would instruct the investigative unit to proceed with the investigation and to collect specific evidence. As the unit performs this function, the members of the Commission may, without losing control of the investigation, devote themselves to preparing their decisions. At the same time, the investigative units should maintain permanent contact and cooperate to ensure that the collection of evidence conforms to the requirements of the Court. These activities might also help further develop an institutional link to promote and facilitate fluid communication and cooperation between the Commission and the Court.

The costs of the investigative units would, to a great extent, be a function of the number of cases before the system. A grander vision than that described above would look to investigative units with greater personnel. It might also possess the capabilities to maintain offices in Washington and San José and, temporary offices in countries that so request. It could have human, financial, technical, and logistical resources to deploy groups of investigators to any part of the hemisphere where events warrant.

For now, the budgetary and institutional reality forces us to think of the more modest but no less important or significant vision of this idea.

**Cost Breakdown: Directors of the Investigative Units of the Commission and Court**

DESCRIPTION	GRADE	HEADING	AMOUNT
Human Rights Specialist	P-5	01	\$100
Human Rights Specialist	P-5	01	\$100
<b>TOTAL</b>			<b>\$200</b>

Amounts in thousands of U.S. dollars